

**COMITÉ DISTRITAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL
ACTA No. 02**

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

HORA: 6:00 PM - 9:30 PM

**LUGAR: ÁULAS BARULÉ, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y PLATAFORMA
VIRTUAL MICROSOFT TEAMS**

ASISTENTES: al final se anexa pantallazo del chat de la plataforma virtual Microsoft Teams, como soporte de la asistencia virtual y se adjunta el listado de asistencia para quienes participaron de forma presencial en la sesión.

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Instalación de la sesión
3. Aprobación del acta del Comité Distrital de Justicia Transicional anterior, realizado el pasado 05 de agosto del 2020.
4. Presentación y definición de la favorabilidad o no del concepto de seguridad.
5. Presentación y aprobación del Plan de Retornos y Reubicaciones no Étnico.
6. Presentación y aprobación de la actualización del Plan de Contingencia para la Atención Inmediata de Emergencias Humanitarias en Bogotá D.C.
7. Cierre.

Siendo las 6:00 pm la Moderadora Saluda e indica que de conformidad con el parágrafo 3 del artículo 173 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 3° del Decreto Distrital 083 de 2012, los integrantes del Comité Distrital de Justicia Transicional no podrán delegar, en ningún caso, su participación. Informa que, teniendo en cuenta lo anterior, se procederá confirmar quórum llamando uno a uno, cada uno de los integrantes del Comité. Si existen encargos por Decreto de alguna de las Secretarías Distritales, del Instituto para la Economía Social-IPES, de la Dirección Regional del SENA, de la Dirección Regional del ICBF, de la Comandancia de la Policía Metropolitana de Bogotá o de la Comandancia de la Brigada Trece, por favor informar de inmediato y hacer entrega de documento de Decreto de encargo de funciones. Señala que, de no existir Decreto de entrega de funciones, los delegados de las instituciones citadas deben

saber que no podrán votar en la presente sesión. Indica que se ha recibido encargo de funciones por parte de la Secretaría Distrital de Planeación.

Procede al llamado a Quorum:

1º. Llamado a lista y verificación del quórum.

Nº	NOMBRE	CARGO /ENTIDAD	QUORUM	
			SI	NO
1	Claudia López	Alcaldesa Mayor de Bogotá	X	
		Alcaldía Mayor de Bogotá		
2	Carlos Vladimir Rodríguez	Alto Consejero	X	
		Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación		
3	Margarita Barraquer	Secretaria	X	
		Secretaría General		
4	Luis Ernesto Gómez	Secretario	X	
		Secretaría de Gobierno		
5	Marcela Rocío Márquez Arenas	Secretaria	X	
		Secretaría de Planeación (E)		
6	Alejandro Gómez	Secretario	X	
		Secretaría de Salud		
7	Edna Bonilla	Secretaria	X	
		Secretaría de Educación		
8	Carolina Durán	Secretaria	X	
		Secretaría de Desarrollo Económico		
9	Xinia Navarro	Secretaria	X	
		Secretaría Distrital de Integración Social		
10	Nicolás Montero	Secretario	X	
		Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		

N°	NOMBRE	CARGO /ENTIDAD	QUORUM	
			SI	NO
11	Nadya Rangel	Secretaria	X	
		Secretaría Distrital del Hábitat		
12	Juan Mauricio Ramírez	Secretario	X	
		Secretaría de Hacienda		
13	Diana Rodríguez	Secretaria	X	
		Secretaría Distrital de la Mujer		
14	Libardo Asprilla	Director	X	
		Instituto Distrital para la Economía Social - IPES		
15	Oscar Gómez	Comandante	X	
		Policía Metropolitana de Bogotá		
16	Oscar Rey	Comandante / Delegado	X	
		Brigada 13 del Ejército Nacional		
17	Diana Arboleda Ramírez	Directora	X	
		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Regional Bogotá		
18	Ana Milena Ángel Parra	Delegada		X
		Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA		
19	Francisco Javier Alonso	Funcionario delegado	X	
		Procuraduría Distrital de Bogotá		
20	Arlez Donelly Mogollón	Personería Distrital	X	
		Personero Delegado para la Protección de Víctimas		
21	Rafael Hernando Navarro	Defensoría de Pueblo	X	
		Defensor		
22	María José Dangond	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	X	
		Directora Dirección Territorial Central		
23	Rossvan Johan Blanco	Unidad Administrativa Especial de	X	

N°	NOMBRE	CARGO /ENTIDAD	QUORUM	
			SI	NO
	Castelblanco	Gestión de Restitución de Tierras Despojadas		
		Director Territorial		
24	Sandra Bonilla	Delegada		X
		Mesa Distrital de Víctimas		
25	John Alexis Gómez	Delegado	X	
		Mesa Distrital de Víctimas		
26	María Fernanda Arboleda	Delegada Mesa Distrital de Víctimas- Organizaciones de Mujeres Víctimas	X	
27	Julisa Mosquera	Delegada Mesa de participación de las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras	X	
28	Paulina Majin	Delegada Mesa de participación de los pueblos y comunidades indígenas	X	
29	Sandro Cristo	Comunidades Gitana o Rrom		X

La moderadora indica que, luego del llamado a Quorum se encuentran presentes 21 de los 29 integrantes del comité, por tanto, hay quórum deliberatorio y decisivo. Posteriormente, se registró la asistencia del Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez; la Secretaria de Hábitat, Nadia Rangel; el Director del IPES, Libardo Asprilla; la Directora del ICBF Diana Arboleda y el Director territorial de la UAEGRTD, Rossvan Blanco, para un Quorum Definitivo de 26 Integrantes.

La moderadora extiende Saludo especial a Luz Marina Díaz, delegada de la mesa de enfoque de mujeres. Saluda a los invitados especiales, Hugo Acero Velázquez, de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y enseguida Saluda a Registraduría Distrital; Agencia de Desarrollo Rural; Agencia Nacional de Tierras; Unidad Nacional de Protección; Dirección de la Fiscalía Especializada en Justicia Transicional; Dirección de la Fiscalía Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos; Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal; Centro de Memoria, Paz y

Reconciliación; Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación; Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático; Alta Consejería distrital de TIC.

Secretaría Privada Alcaldía de Bogotá; Secretaría de Ambiente; Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud; Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos; Instituto Distrital de Turismo; Instituto de Desarrollo Urbano; Ministerio del Interior; Instituto Distrital de las Artes; Caja de Vivienda Popular; Instituto Distrital de Recreación y Deporte; Orquesta Filarmónica de Bogotá; Veeduría Distrital; Fundación Gilberto Alzate Avendaño.

Da las buenas tardes y la bienvenida a todos y todas a la segunda sesión ordinaria del Comité Distrital de Justicia Transicional 2020. Recuerda a los participantes de la sala principal y de la sala virtual que la sesión NO podrá ser grabada por audio o video, a excepción de la Secretaría Técnica del Comité Distrital de Justicia Transicional.

Lo anterior teniendo como base la Resolución 036 de 2014, que adopta el reglamento del Comité Distrital de Justicia Transicional y que establece en su artículo 17 que “las decisiones del Comité Distrital de Justicia Transicional serán comunicadas a la opinión pública por el Alcalde Mayor, quien, cuando sea pertinente, expedirá los comunicados e informará sobre las decisiones tomadas”.

Aclara también que “las actas de las sesiones serán de público conocimiento, y una vez formalizadas, serán puestas a disposición por los medios más idóneos, salvo aquellos apartes cuya publicación pueda poner en riesgo a las víctimas del conflicto armado”. Por lo anterior, agradecemos a los integrantes, invitados permanentes, invitados especiales y demás participantes respetar el reglamento interno del Comité durante la sesión.

A continuación, se lee la agenda de la sesión:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Instalación de la sesión
3. Aprobación del acta del Comité Distrital de Justicia Transicional anterior, realizado el pasado 05 de agosto del 2020
4. Presentación y definición de la favorabilidad o no del concepto de seguridad
5. Presentación y aprobación del Plan de Retornos y Reubicaciones no Étnico
6. Presentación y aprobación de la actualización del Plan de Contingencia para la Atención Inmediata de Emergencias Humanitarias en Bogotá D.C.

7. Cierre.

Otorga la Palabra a la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Dr. Claudia López, quien presidirá la Sesión.

2º. Instalación de la sesión

Interviene la Alcaldesa

La presidenta del Comité y Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, da las buenas tardes a todos, y les agradece la compañía en el CDJT con todas las entidades de la sociedad civil, del Gobierno Nacional, del Ministerio Público y de la Alcaldía Mayor, conforme al Reglamento. Indica que se desarrollará la agenda prevista, que explicará el Alto Consejero, y a desarrollar cada uno de los 3 puntos previstos en la agenda. Solicita a Vladimir Rodríguez, Alto Consejero, que explique la agenda.

Interviene el Alto Consejero

Da las buenas tardes a todos y todas, agradece los representantes de la Mesas de Víctimas su presencia, que es fundamental en el marco de la garantía de la participación que está en el marco del Decreto 512, agradece la participación de la delegada de la Mesa de Enfoque de Mujeres, que como se acordó en el anterior CDJT, a partir de la modificación del Decreto podrá participar en el siguiente comité con voz y voto siendo un hecho histórico que reconoce la importancia de la organización de mujeres en los territorios. Repasa la Agenda.

Indica primero, un diálogo para la aprobación del concepto de seguridad, donde a través del gobierno nacional, la Brigada XIII, la Policía Metropolitana de Bogotá y Secretaría de Seguridad se harán las diferentes conceptualizaciones, luego se escuchará al Ministerio Público y a las víctimas. Luego se hará la socialización del plan de Retornos y Reubicación no Étnico, es importante hacer la aclaración que plan de retornos y reubicaciones Étnico, como bien lo saben las delegadas y delegados de las mesa afro e indígenas, lo construiremos participativa y conjuntamente con la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, en el periodo que de aquí al siguiente comité nos corresponde para el mes de marzo; y por último, el Plan de Contingencia del cual se dejará hoy en su ruta establecida para integrarlo en el Plan de emergencia y atención a situaciones de riesgo climático en Bogotá, en el próximo CDJT.

3º. Aprobación del acta del Comité Distrital de Justicia Transicional anterior, realizado el pasado 05 de agosto del 2020

La moderadora indica que se continuará con el orden del día y se procede a la aprobación del acta del Comité Distrital de Justicia Transicional anterior, realizado el pasado 05 de agosto del 2020. Expresa que en cumplimiento del numeral 4, del artículo 13 de la Resolución 36 de 2014, la ACDVPR en calidad de Secretaría Técnica del CDJT, realizó el acta de la sesión del 05 de agosto del 2020 y la remitió el día 19 de agosto por correo electrónico a los integrantes y asistentes, para su revisión y retroalimentación; quienes podrían sugerir ajustes o modificaciones dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la misma, es decir, hasta el 26 de agosto del año en curso.

Informa al plenario que se recibió una observación el día 25 de agosto por parte de la delegada de la Mesa Distrital por Organizaciones de Mujeres Víctimas del Conflicto, María Fernanda Arboleda, quien solicitó que se incluyera su solicitud a cerca de que todas las entidades competentes en el tema seguridad para los líderes y lideresas de víctimas se hicieran presentes en el Comité Distrital, observación que fue incluida en el acta.

Aclara que teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento del artículo 15 de la Resolución 36 de 2014, donde se establece que el acta debe ser aprobada por el Comité en pleno; y después de cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento, se procede a la aprobación del acta de la sesión del 05 de agosto del 2020.

Pregunta al plenario si existe alguna objeción para la aprobación del acta de la Primera Sesión 2020 del Comité Distrital de Justicia Transicional, realizada el pasado 05 de agosto.

Se procede a la firma del Acta por parte de la Alcaldesa y el Alto Consejero

Luego de la Firma del Acta, se resalta que las intervenciones que realicen los miembros del Comité sobre cada punto de la agenda contarán con 3 minutos de duración y se realizarán al finalizar la presentación por parte del Alto Consejero sobre cada tema. Indica que se continúa el orden del día, con el punto número 4 y otorga la palabra al Alto Consejero.

4°. Presentación y definición de la favorabilidad o no del concepto de seguridad

Interviene el Alto Consejero

Solicita la presentación sobre el concepto de seguridad, que es el que determina los principios para viabilizar el acompañamiento al retorno o a la reubicación de la población incluida en el RUV, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Los principios son Seguridad, Dignidad y Voluntariedad. Los profesionales, especialmente de la UARIV, son los responsables de la gestión y el trámite de los conceptos de seguridad, para verificar el principio de seguridad en todos los procesos de acompañamiento al retorno o reubicación, o integración local en instancias de CTJT. Indica que el Concepto debe renovarse cada 6 meses y es por eso se dará viabilidad al mismo.

Presenta el escenario general de las víctimas en Bogotá. Indica que hay en la ciudad, según el RUV, 358.408 víctimas, de las cuales 332.732 son víctimas de desplazamiento forzado, algunas aunadas a otros hechos. 77.169 víctimas están sin identificar en la ciudad. Las localidades con mayor número de víctimas son Ciudad Bolívar y Bosa, donde se desarrollan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, y un indicador que es el de víctimas de Sumapaz por 44 con situaciones que se han podido constatar que tuvieron problemas para el acceso al registro y es una situación que se solventará en un nuevo espacio con las entidades competentes teniendo claro las posibilidades que ofrece la norma.

Expresa que el concepto de seguridad se trae al CDJT ya que la Ley 1448 solicita que la evaluación de las condiciones de seguridad de la zona de retorno o reubicación deben ser remitidas por la fuerza pública y se debe hacer seguimiento periódico acorde a lo indicado en las directrices del Ministerio de Defensa Nacional. Los conceptos de la fuerza se complementarán con los de las demás entidades territoriales, y en concepto final del Comité Territorial – CT – será remitido a la UARIV Y UAEGRTD con el fin de determinar las acciones a seguir en los procesos de RyR.

Repasa que los aspectos por valorar en el concepto de seguridad son nueve:

- Presencia actual de Grupos al Margen de la Ley
- Acciones recientes que atentan contra los Derechos Humanos y el DIH.
- Antecedentes históricos sobre afectaciones en el territorio
- Corredores de Movilidad
- Alertas Tempranas, Informes de Riesgos, Notas de Seguimiento
- Explotación ilícita de yacimientos mineros
- Información sobre número de víctimas registradas

- Apreciación de seguridad sobre la posibilidad de desarrollar o no un retorno y/ reubicación de la población víctima en el territorio
- Existencia de minas antipersona y municiones sin explotar – MAP y MUSE – en el territorio en cuestión, es decir, Bogotá.

Plantea el paso a paso para la construcción del concepto, que implica que la ACDVPR le informa a la UARIV la fecha del CDJT para el cual requiere el concepto, la UARIV solicita la apreciación de seguridad a la fuerza pública, a través de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa Nacional, la ACDVPR adelanta las acciones de articulación con la MEBOG, la Brigada XIII, el sector Gobierno, el sector seguridad, el SAT Defensoría y se remiten las invitaciones al Comité, este proceso que se ha desarrollado desde el anterior comité hasta el actual.

Expresa que desde la ACDVPR se modera las apreciaciones e intervenciones al concepto de seguridad, dando paso al Gobierno Nacional: Brigada XIII y MEBOG y en cabeza del distrito intervendrá el Secretario de Seguridad, Hugo Acero, concepto que además ha sido trabajado por la secretaria de gobierno, la secretaria de seguridad, la Alta Consejería – Secretaría General y será presentado aquí a los delegados de víctimas. Posteriormente, se le dará el espacio al Ministerio Público y luego para la articulación se dará el paso a los delegados de las mesas de víctimas. Da la palabra al Gobierno Nacional y a sus delegados para la intervención al respecto.

Interviene Directora UARIV Territorial Central

Agradece al Alto Consejero, e indica que se va a explicar junto con el profesional de apoyo la ruta de construcción del concepto.

Interviene Jonathan Forero Profesional Especializado de la UARIV

Expresa que las apreciaciones de seguridad emitidas por la fuerza pública son un insumo en el marco del CDJT que deben ser utilizadas para emitir favorabilidad o no del concepto que se daba dar en el marco de los procesos de RyR para la población desplazada. Expresa que desde la UARIV se hace el acompañamiento en la formulación del Plan de retornos, y en la solicitud a la fuerza pública y Ministerio de Defensa del concepto de seguridad, que son los insumos que presentará la fuerza pública en el marco del comité.

Interviene el delegado de la Brigada 13 Cr. Luis Eduardo Cifuentes Villamarin – Jefe de Estado Mayor de la Décimo Tercera Brigada, segundo comandante en representación del Brigadier General Oscar Rey Linares

Se presenta, y expresa que de acuerdo a los artículos 66 de la ley 1448 del 2011 y al artículo 74 del Decreto 4800 del 2011, se permite emitir la apreciación de seguridad para el distrito capital, conforme a lo expuesto en las directivas del 026 del 2014 y 020 del 2015, basado en los interrogantes ya expuestos en los 9 puntos por el Alto Consejero.

Indica que después haber hecho los análisis de inteligencia con la sección de operaciones e inteligencia como tal, podemos informarle al Comité que están dadas las condiciones de seguridad, por parte de las unidades tácticas, basadas en el desarrollo de las operaciones militares dentro del marco de la Constitución Política y que están dadas las condiciones y que si existe la posibilidad de desarrollar el retorno y la reubicación de la población víctima del desplazamiento en la ciudad de Bogotá.

Interviene Cr. Nelson Quiñones en representación de la Policía Metropolitana de Bogotá

Expresa que Bogotá, como todas las ciudades, tiene situaciones especiales en el tema de seguridad ciudadana, y hay trabajos que se vienen haciendo en temas de judicialización captura y resultados operacionales. Expresa que no hay información de lo que corresponde a grupos armados ilegales en Bogotá, y el mecanismo para validar el concepto es a través del centro integrado mediante el cual se recoge toda la información que se tiene para procesar y de ahí sacar un soporte para dar concepto. Señala que de acuerdo a esto, se da un concepto favorable para el retorno de las personas víctimas del conflicto en la ciudad de Bogotá. Así mismo, hay un trabajo que se viene haciendo, de acuerdo a unas directrices institucionales, se han tomado medidas preventivas de seguridad, hay 54 medidas preventivas de seguridad implementadas a líderes sociales y defensores de DDHH, con un total de 15.538 medidas tramitadas en Bogotá, en lo que va corrido de este año, y se ha dado respuesta a 70 oficios de diferentes entidades en el marco del despliegue de la directiva 013 de la Inspección General de la Policía.

Indica que en lo corrido del año no hay hechos de afectación a vida e integridad de los líderes de la ciudad de Bogotá.

Interviene Secretario de Seguridad, Hugo Acero

Señala que junto con varias instituciones del distrito, la secretaria de gobierno, la consejería, se realizó la siguiente presentación y algunos documentos anexos.

Indica que en Bogotá se han tenido 5 alertas tempranas por parte de la Defensoría, 1 en 2018, de carácter nacional que involucró a Bogotá y las restantes relacionadas con Bogotá, la 086 de 2028, la 023 y 046 de 2019, 022 del 2020. Señala que en todas se ha venido trabajando particularmente desde el comienzo del Gobierno, en reunión anterior a la posesión de la alcaldesa, con el Defensor del Pueblo.

Expresa que se han realizado 236 acciones, en los distintos territorios y localidades donde se presentaron las alertas tempranas, y estas acciones básicamente están orientadas a reconocer los diferentes problemas de seguridad ciudadana y a atender víctimas y personas en riesgo, mediante distintos programas y acciones, referenciadas en la presentación y documentos referenciados.

Refiera 90 actividades de prevención, que van desde recorrido y reconocimiento territorial, que se ha hecho con acompañamiento de otras entidades, no solo del distrito como la secretaria de gobierno, la secretaria de educación, la alta consejería, la secretaria de integración social, sino también, de la personería, en términos del reconocimiento de los problemas que existen en los territorios, también diálogos permanentes con defensores de los derechos humanos, líderes sociales, organizaciones de mujeres y organizaciones sociales distintas, igualmente, actividades de sensibilización a riesgos y autocuidado. Así como, temas de control, con la policía metropolitana, realizando acciones de seguridad, presencia territorial y desarticulación de bandas delincuenciales, que hay en el territorio y que afectan la convivencia y seguridad ciudadana y hay distintas acciones, básicamente en contra de estructuras criminales, que actúan en los territorios.

En acceso a la justicia, menciona acciones de acercamiento preventivo y pero también de atención en justicia, e igualmente, atención en temas de denuncias, calumnias, extorsión, secuestro y amenazas. En el caso de amenazas de líderes, se recibieron algunas denuncias, pero se tramitan a través de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno.

Asevera que según el índice de riesgo de victimización de la UARIV, para el año 2019 el riesgo de victimización en Bogotá es bajo, en el entendido que la probabilidad de acaecimiento de evento masivo de más de 50 personas o 10 familias es igualmente bajo y no ha sucedido en este año, en el caso de Bogotá.

En Bogotá ocurren violentos asociados al conflicto armado nacional, pero señala que no puede afirmarse que de manera general que estos hechos victimizantes que ocurren en Bogotá se presenten con ocasión del conflicto armado, por ejemplo: el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de pandillas o de narcotráfico y microtráfico, la violencia intrafamiliar o la deserción escolar; no guardan relación con el conflicto. Las amenazas a líderes y defensores de DDHH son los hechos victimizantes más comunes, en Bogotá,, algunas de esta pueden enmarcarse en la situación del conflicto armado que vive el país, pero, en un ejercicio de violencia política, algunos casos corresponden a fenómenos delincuenciales en Bogotá.

Indica que hay presencia de células del ELN que son unidades mínimas que se integran por 2 o 3 personas y que actúan de manera esporádica, no tienen capacidad para sostener combates ni ejercer control territorial.

En materia de seguridad, lo que si hay son organizaciones, grupos delictivos organizados, en la actualidad se identifican 228 grupos de delincuencia común organizada, y en el último semestre se han desactivado 72 y en el conjunto del año 140 con un trabajo conjunto con la Fiscalía y Policía. El objetivo de esas organizaciones criminales es la extracción de rentas criminales, narcotráfico, narcomenudeo, loteo ilegal de predios (en los bordes de la ciudad), extorsión para uso de espacio público, los hurtos en diferentes modalidades (según el territorio) , trata de personas y venta de licor adulterado, entre otros problemas de inseguridad.

La explotación de estos mercados criminales produce daños en la comunidad como son homicidios, desplazamiento y amenazas. La presencia de grupos es dispersa, no existen grandes grupos que amenacen sistemáticamente a la ciudad o institucionalidad, no tiene control territorial y su acción es localizada. En el segundo semestre se han desarticulado 72 organizaciones de delincuencia común, mayoritariamente de acción en localidades donde se presentaron alertas, pero también en otras localidades donde actúan. Ese es el panorama que se tiene desde el punto de vista de seguridad en Bogotá.

Interviene la alcaldesa Mayor, Claudia López.

Indica que quiere agregar a lo dicho por el secretario de seguridad, que en la Alcaldía se toma muy en serio las alertas tempranas de la Defensoría, obviamente los informes de inteligencia de las diferentes fuerzas, tanto de las fuerzas militares, como, de la policía nacional, pero también las alertas tempranas. Indica que, en el Empalme hecho

en los meses de noviembre y diciembre para la Alcaldía, se informó que la Secretaría de Seguridad desconocía y no reconocía las alertas tempranas que estaba emitiendo la Defensoría, lo que parece un despropósito institucional.

Indica que en la alcaldía actual no solamente se reconocen y se aprecian las valiosas y rigurosas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo; sino que su información se ha incorporado a la política de seguridad y convivencia de la ciudad, no solamente como política sino como acción operativa. Se han diseñado acciones específicas para mitigar y prevenir los hechos alertados, en los puntos y con los grupos específicos. De manera que, nuestro concepto de seguridad, expuesto por el secretario, en lo mínimo, desconoce las alertas que ha hecho el Ministerio Público, por el contrario, las incorpora tanto en la política como en acciones de mitigación y prevención.

Interviene el Ministerio Público. Dr. Rafael Navarro – Defensor del Pueblo Regional

Saluda a cada integrante, indica su complacencia con el cambio de paradigma establecido en el distrito en el sentido del reconocimiento de existencia de conflicto armado en Bogotá y, por ende, la autonomía que tiene la Defensoría del Pueblo para emitir alertas tempranas con documentos técnicos que alertan sobre el conflicto armado y permiten servir de insumo para el concepto de seguridad expuesto por secretario de seguridad.

Dicho lo anterior, indica que el Ministerio Público ha redactado un documento que implica la posición de todas las instituciones que lo integran y procede a leerlo:

Respetada señora Alcaldesa:

En el marco de la realización de la segunda sesión del Comité Distrital de Justicia Transicional –CDJT– del 23 de noviembre de 2020, en el cual se tratará la presentación y aprobación del Concepto de Seguridad, el Plan de Retornos y Reubicaciones no Étnico y el Plan de Contingencia para la Atención Inmediata de Emergencias Humanitarias, desde la Presidencia de la Comisión Distrital de Bogotá del Ministerio Público para la Justicia Transicional (Comisión Distrital) nos permitimos reiterar algunas apreciaciones ya presentadas en las anteriores sesiones de este espacio.

Los miembros de la Comisión Distrital evidenciamos que se presentan dos condiciones problemáticas en la fundamentación de los temas a tratar, estos son: (i) falencias en los procesos de caracterización de la población víctima residente en la ciudad de Bogotá y (ii) una mirada del concepto de seguridad para la ciudad, que desconoce el impacto del conflicto armado en la capital.

Ambos aspectos coyunturales que afectan: en primer lugar, la construcción de políticas públicas que den cobertura real a las necesidades de la población víctima y el goce efectivo de sus derechos; en segundo lugar, la adopción de medidas focalizadas para evitar la repetición de hechos victimizantes y las afectaciones que se presentan con su consumación; y en tercer lugar, impide el acceso de la población a las rutas de atención, al desconocer que los hechos victimizantes vividos pueden darse con ocasión del conflicto armado.

- Frente a las falencias en los procesos de caracterización de la población víctima residente en la ciudad de Bogotá:

Uno de los datos de caracterización provistos dentro del Plan de Retornos y Reubicaciones no Étnico informa que, de las 332.732 víctimas que sufrieron hechos de desplazamiento forzado en el distrito, se cuenta con la información de que 45.541 manifestaron la intención de realizar algún proceso de retorno o reubicación de acuerdo 2 con la normatividad vigente, por lo cual se encuentran sin caracterización al respecto 287.191 víctimas. Además de esas 45.541 personas que manifestaron su intención de acceder a estos procesos, solo 466 personas cuentan con acta de voluntariedad, por lo que hay 45.075 víctimas que a pesar de haber manifestado su intención, no han accedido efectivamente a la firma del acta de voluntariedad, sin claridad en los tiempos que este tránsito puede tardar.

Ahora bien, esta información es diferente a la presentada por la UARIV a la Comisión Distrital a través de oficio de noviembre de 2020, pues en este se indicó que desde 2011 a noviembre 2020 hay 2.955 solicitudes de población residente en la ciudad de Bogotá que cuentan con acta de voluntariedad y que solicitaron retorno, reubicación o integración local. De igual forma, a nivel nacional se cuenta con 13.540 solicitudes de población que requiere iniciar un proceso de retorno, reubicación o integración local en la capital, lo que demuestra la falta de articulación o falta de correspondencia en la presentación de los datos.

Por otro lado, a pesar de que la administración reconoce la dificultad en la información para el resto de las personas que puedan estar interesadas en entrar en un proceso similar, razón por la que se activaría una estrategia para realizar una búsqueda de aquellas víctimas que puedan tener interés en alguna de estas medidas de reparación, no se informa el cronograma, ni acciones concretas que permitan dentro del periodo de esta administración caracterizar a la población restante en la vía de garantizar el acceso de toda la población víctima al proceso de retornos, reubicaciones o integración local.

Tal como la Administración lo menciona, la Corte Constitucional en Auto de Seguimiento 373 de 2016 a la T-025, identificó bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales en el componente de retornos y reubicaciones que dificultan el goce efectivo de derechos de la población víctima de desplazamiento forzado e impiden la consolidación de estos procesos. Estos se relacionan con: i) la inexistencia de criterios objetivos y racionales para el diseño de la política, ii) el desarrollo de acciones de acompañamiento de manera excepcional, iii) la ausencia de mecanismos para garantizar la sostenibilidad de los procesos de retornos y reubicaciones, y iv) la persistencia en los problemas de seguridad, entre otros.

Así mismo, la Sala advirtió que "el acompañamiento no se reduce a una serie de trámites para el traslado de la población retornada y reubicada, sino que también debe incluir una serie de acciones encaminadas a gestionar y concretar la oferta institucional necesaria para la atención y la estabilización socio-económica de esta población".

Esta apreciación concuerda con lo indicado en El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", en el cual se plantea respecto de los planes de retorno y reubicación que "ha sido complejo de implementar debido a la dificultad para definir el universo sujeto de acompañamiento y el alcance de dicho acompañamiento en relación con el acceso a la oferta local y nacional" (DNP, 2019, pág. 735).

No tener un universo de acción claro impide enfocar esfuerzos necesarios y proyectar las disposiciones técnicas y administrativas para avanzar en la materialización de los 3 derechos, por lo que se reitera la necesidad de contar con censos reales y articulados entre las diferentes entidades de la Administración, para lo cual se debe implementar una estrategia inmediata que permita contar con la información adecuada.

La caracterización de la población víctima residente en Bogotá que se trae desde de Red Nacional de Información y la oferta institucional que con ella se propone, no visibiliza un cubrimiento acorde a sus necesidades y características demográficas y por ende dificulta el establecimiento de metas y el

seguimiento en clave de goce efectivo de derechos, por parte de los entes de control y de las mismas víctimas.

Por lo anterior, la Comisión reitera lo manifestado en la primera sesión de este Comité y lo ya mencionado por la Corte Constitucional, ya que dentro de las acciones planteadas en el Plan de Retornos y Reubicación no Étnico solo se cuenta con las 143 metas de las 19 entidades contempladas ya en el PAD, entre ellas el acceso a 2.000 unidades de vivienda para el cuatrienio; Metas que, ya se había advertido, no reflejan una oferta institucional suficiente para la acceso efectivo al derecho de la estabilización socioeconómica, y la actuación del ente territorial solo refleja la remisión formal a los programas omitiendo su materialización.

- Respecto del concepto de seguridad que será aprobado en este CDJT.

La Comisión Distrital reconoce que este es un prerequisite para permitir los procesos de Retorno y Reubicación y la construcción de los Planes de Contingencia y Prevención. Además, el concepto a aprobar no evalúa las múltiples expresiones de la conflictividad urbana; también reconocemos que, para producir este concepto, se tiene en cuenta la información emitida por los organismos de seguridad del Estado.

No obstante, preocupa que las autoridades en Bogotá siguen negando la relación existente entre las dinámicas de la delincuencia en la ciudad con el conflicto armado y la ocurrencia de hechos con ocasión de este, por lo que a la fecha no se conocen los impactos de acciones para la mitigación de los factores estructurales de riesgo en las localidades advertidas por la Defensoría del Pueblo a través de las alertas tempranas. Conviene señalar el llamado de la Corte Constitucional sobre la concepción amplia que las entidades competentes deben tener al revisar y analizar hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado, referida en Sentencia C-781/12, “La expresión “con ocasión del conflicto armado” tiene un sentido amplio que cubre situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado. A esta conclusión se arriba principalmente siguiendo la ratio decidendi de la sentencia C-253A de 2012, en el sentido de declarar que la expresión “con ocasión de” alude a “una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado”.

En este sentido, no son comprensibles los pronunciamientos públicos de los altos mandos de la Fuerza Pública y del Fiscal General de la Nación, tras los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020, en los que se informa, a través de medios de comunicación, la presencia de actores armados no estatales, parte del conflicto armado, como el ELN y de facciones disidentes de las extintas FARC-EP, en las ciudades de Bogotá D.C. y Soacha Cundinamarca, la cual se señala, fue detectada con anterioridad a las manifestaciones sociales del 21 de noviembre de 2019, cuando no se había notificado a otras entidades encargadas de la formulación, adopción, implementación y seguimiento de los planes de prevención, contingencia, retornos y reubicaciones, atención y asistencia, para que pudieran hacer frente a los escenarios de riesgo por violaciones a los derechos humanos y a posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario, derivados de estas evidencias.

Por tanto, la desestimación de la información que evidencia la presencia de actores armados no estatales parte del conflicto armado, y su articulación, subordinación o coordinación con grupos armados de crimen organizado en estos territorios, a la que se ha hecho referencia tanto en las alertas tempranas, como en los informes de seguimiento emitidos por la Defensoría del Pueblo, y los análisis de los escenarios de riesgo con enfoque poblacional en diálogo con las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, incorporados en el Plan de Contingencia, conlleva a que las acciones emprendidas no sean suficientes, ni eficaces para la erradicación y desmantelamiento de estos actores, y en la formulación e implementación de políticas públicas, encaminadas a la prevención, protección y garantías de no repetición.

En cuanto dichos procesos se basan en la conceptualización del riesgo que emite la Fuerza Pública, y si ésta desestima riesgos que pueden concretarse, tal como lo han evidenciado en los informes de seguimiento de las alertas tempranas, y las consumaciones al riesgo advertido que ha aportado la

Defensoría del Pueblo, ese desconocimiento puede derivar a una inducción al error en la formulación de Planes de Acompañamiento enmarcados en la Directiva 026 de 2014 del Ministerio de Defensa, en las materias referidas.

Un reflejo de lo manifestado se da en la no adopción dentro de las 14 rutas de atención en el Plan de Contingencia para la Atención Inmediata de Emergencias Humanitarias, de una ruta de atención para el hecho victimizante de vinculación, reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes – NNAJ- a grupos armados ilegales, a pesar de lo advertido por la Defensoría del Pueblo a través del Sistema de Alertas Tempranas mediante diferentes documentos e informes, que indican que en la ciudad hacen presencia miembros de Grupos Armados Ilegales -GAI-, dedicados a acciones de reclutamiento y vinculación de personal para fortalecer las estructuras de éstos en otras regiones del país.

Uno de los hallazgos evidenciados por la entidad, es la modalidad en la que la población víctima del conflicto armado, con promesas laborales engañosas, es vinculada y enviada a las zonas que conocen y esto les otorga a los GAI una ventaja militar. Tampoco se evidencian programas o actividades para la mitigación de este riesgo y, en general, dentro de las 14 rutas no se implementan acciones preventivas de protección de bienes y personas, que cobijen a la población, en cuanto se surten los procesos de valoración de las medidas de protección.

Dicho lo anterior y entendiendo que la administración de Bogotá para el periodo 2020 – 2024, busca ser “epicentro de paz y reconciliación”, se insta a que se establezcan acciones expeditas para mejorar los procesos de caracterización que permitan determinar la población objeto a atender, y a que se incorporen acciones efectivas y oportunas en los Planes de Acompañamiento de la Fuerza Pública de acuerdo con la 5 Directiva 26 de 2014 del Ministerio de Defensa, que den garantía de la seguridad de la población víctima contemplando los riesgos ya advertidos.

Por otra parte, la Comisión Distrital reitera lo manifestado en la anterior sesión del CDJT y que ha sido una observación permanente en los diferentes espacios por parte de los delegados de la Mesa Distrital de Participación Efectiva de Víctimas, en los cuales se evidencia que el derecho a la participación se convierte en un requisito formal que no garantiza su incidencia en la toma de decisiones, sumado a la ausencia de garantías de conectividad y NO provisión de equipos.

Adicionalmente esta CDBMPJT, en cumplimiento de sus competencias de verificación, informará y hará la medición del goce efectivo de los derechos de las víctimas que realiza la administración, en especial sobre los derechos a la seguridad y garantías de no repetición, instando a que se adopten las medidas preventivas para mitigar posibles amenazas que puedan menoscabar los derechos de las víctimas.

Para finalizar, los integrantes de la Comisión Distrital de Bogotá del Ministerio Público para la Justicia Transicional (Comisión Distrital) participamos en este CDJT, con voz, y absteniéndonos de votar, ya que las decisiones tomadas en este espacio pueden ser objeto de investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Bogotá.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

NÉSTOR MAURICIO AREIZA MURILLO

Procurador Distrital

Presidente de La Comisión Distrital de Bogotá del Ministerio Público para la
Justicia Transicional (Comisión Distrital)

Interviene el Alto Consejero para las Víctimas

Para claridad de las y los asistentes, el ministerio público, solicito por interno hacer una única intervención, por eso el defensor regional hizo uso de los 15 minutos, sumando

las tres intervenciones de las entidades del Ministerio público. El documento leído por el defensor regional de pueblo, será integrado al acta, documento allegado en físico y del cual se hará la socialización respectiva a todos los y las integrantes del CDJT.

Interviene Julissa Mosquera, delegada de la Mesa de Enfoque diferencial Afro

Saluda a todos los integrantes, e indica que ve muy preocupante que hoy se apruebe el tema de seguridad, y escuchar al coronel decir que en Bogotá no pasa nada, pone a pensar a las víctimas que de ¿dónde salen las amenazas?, de dónde sale que los líderes y cada uno de los representantes de la mesa no puedan ejercer el liderazgo porque se les permite. Pregunta de ¿dónde salen los panfletos que los amenazan a diario y que las alertas tempranas han dado a conocer?. Dice que es muy preocupante que la policía diga en ese escenario, junto a la alcaldesa, que no pasa nada, les preocupa eso y les gustaría que en el día de hoy se les dijeran de ¿dónde salen los panfletos?, porque si dicen que no pasa nada, tendrán la claridad de donde salen los panfletos que amenazan a diario a los que ejercen el liderazgo en Bogotá.

Señala que como mesa de enfoque diferencial les gustaría un consejo de seguridad con la policía, porque son todas las mesas, en su mayoría de miembros, los amenazados, y sí necesitan que la policía nacional y el ejército los escuche y esté claro las amenazas que tienen en la cual están las vidas en riesgo. Indica que se irá con una preocupación grande porque debe decirle a la comunidad que representa que en Bogotá no pasa nada, porque eso ha señalado el coronel. Dice que con razón hay funcionarios que cuando los compañeros van a dar a conocer una situación, les responden que en Bogotá no pasa nada, porque no han matado a ninguno. Pregunta si se está esperando que empiecen a matar a líderes y lideresas para tomarse el tema en serio. Señala que se van tristes porque el concepto de seguridad implica poder ejercer liderazgo; pero cuando ese liderazgo se ve amenazado, y en un escenario como este y en cabeza de una mujer que ha estado al frente y que le ha dicho a los entes de seguridad que algo está pasando con las víctimas, pero que el coronel diga que no pasa nada es para preocuparse y así se irán en la noche de hoy.

Interviene la Mayora Paulina Majín, delegada de la Mesa de Enfoque diferencial Indígena

Saluda y expresa complacencia de estar tan cerca de la alcaldesa. Se acoge a lo que propone el señor defensor y creo que son los conceptos acertados porque ellos van a terreno y ven todas las dificultades. Dice que se deben tener en cuenta las apreciaciones del documento que el Dr. leyó, para tratar de corregir y mejorar porque

para eso se está como representantes de comunidades. Dice que a veces no entiende porque no se replantea el comité, en la cuestión de seguridad, porque para los líderes no basta colocarles un carro blindado o un policía, no debería ser así, pide que se busque una formula diferente y que se llame a los líderes para ver cuál va a ser el mejoramiento de la seguridad.

Pregunta si ellos van a aprobar el plan de retorno y seguridad y los puntos que convergen, pregunta que, si a ellos no les compete, porque no es étnico, o si sí, porque le llama la atención que ella vaya a representar unos pueblos y deba aprobar algo que de pronto no conoce muy bien, pide que le expliquen para no cometer errores . Señala que las víctimas también tienen el compromiso y deber y debe ser una colaboración de todas las partes, que si los retornos se aplican al menos para la población indígena deben ser garantizados porque de nada sirve si no se puede regresar a los territorios, pero se debe mirar que por ejemplo en los territorios indígenas no haya ya tierra para poder que se den los retornos, piensa que los pueblos si deben salir de Bogotá para poder satisfacer sus derechos como autosuficientes que deben ser los pueblos indígenas en la ciudad de Bogotá.

Interviene el Alto Consejero para las víctimas

Aprovecha para aclarar que el plan de retornos y reubicaciones así no sea étnico debe pasar por los delegados formales al CDJT así como el plan de retornos étnico que se trabajará, desde ahora y hasta el mes de marzo, con la secretaria de gobierno, debe pasar por los delgados formales del Comité según el Decreto 512.

Interviene John Alexis Gómez Delegado Mesa Distrital

Saluda, se presenta, indica que como mesa están bastante preocupados, porque ven que los organismos de control, que deben velar por la seguridad de las víctimas, dicen que no pasa nada, y se acogen al documento del Ministerio Público; para eso son las alertas tempranas. Asevera que ellos conocen todas las amenazas y mecanismos y lo han estudiado y recopilado y por eso emiten el documento entonces se acogen, y se van con tristeza de venir a escuchar un concepto de seguridad y que el organismo de control que debe estar en cabeza en investigación de los hechos, diga que no pasa nada, que no existen amenazas, entonces cree que se debe evaluar la situación porque eso causa indignidad.

Interviene El Cr. Nelson Núñez, en representación de la Policía Metropolitana

Señala que de pronto malinterpretó alguna información, pues el tema de las amenazas si está, no se pueden negar, hay una noticia criminal que se tiene, una investigación de la cual no ha habido respuesta toda vez que está en cabeza de la Fiscalía, pero que si hay 15 casos registrados este año.

Interviene María Fernanda Arboleda, Delegada de la Mesa Distrital

Indica que como mujer que viene de una mesa, que viene de los territorios; se adoge a lo que dice el Ministerio Público. Explica que la alerta 023 sale de las denuncias hechas en un Comité de Justicia Transicional, como este, pregunta y solicita que su pregunta quede en el acta ¿Qué pasó con las familias, las mujeres, de los hijos que mataron en Kennedy, que fue a raíz de un tema de narcotráfico? ¿Qué pasó con los hijos de mujeres víctimas involucrados en esto?

Indica segundo: La alerta 046 sale a raíz del trabajo que han hecho en territorio. Reclama que las mujeres víctimas no son trabajadoras sexuales, son mujeres explotadas sexualmente y de trata de personas en un territorio en que vinieron a buscar refugio, y han hecho un trabajo arduo, Petra Mujeres Valientes, ha entregado todo con organizaciones de mujeres que van al territorio.

Señala que en la administración pasada quedaron unos mapas de riesgos trabajados desde todas las mesas, donde denunciaron, a raíz del trabajo de Petra, que los hijos e hijas de mujeres víctimas están siendo captados en las localidades por el micro y el narcotráfico. Pregunta: ¿saben cuántos hijos e hijas de ellas están en la cárcel? ¿Saben cuántos hijos les han matado en Bogotá y que llegaron siendo niños que no sabían porque salían de su territorio? Los han matado en el distrito, en las zonas periféricas, por captación de narco y microtráfico. Explica que han tenido temas de intento de homicidios en las zonas periféricas, y asegura que se va muy dolida con el tema que se ha tocado, porque ni siquiera tienen apoyo de reubicaciones para mujeres víctimas de estos hechos, pues el tema de seguridad por las pandillas que tienen el control pone a todo un núcleo familia en riesgo. Asegura que nunca les ha interesado tocar este tema, de derecho humanitario de defender su familia y su integridad, como mujeres que dependen y parten del núcleo familiar que deben mantener unido ese núcleo familiar. Indica que uno de los casos es una chica de 24 años con 4 hijos, hoy está en la cárcel, y tiene un diagnóstico de problema psiquiátrico, pero nunca les han ayudado, y sus niños están en diferentes lados, porque no pueden arriesgarse a que vaya Bienestar Familiar, porque no hay un compromiso claro con los hijos e hijas desde ICBF.

Pregunta: ¿todo el tema de drogas psicoactivas que se mueve en el distrito de Bogotá de dónde viene?, pues siempre se ha preguntado esto. De donde viene la marihuana y la cocaína que se distribuye y se maneja en Bogotá y quiénes son los que tienen en los territorios lejanos ese control de todo eso, y realmente es ratificante que el secretario de seguridad diga en Bogotá no pasa nada. Cuando en la caracterización del centro, cuando empezó la pandemia, visibilizaron la situación de pobreza extrema en que se encuentra una gran cantidad de víctimas del conflicto armado, y que están expuestos nuestros hijos e hijas en esas zonas.

Interviene Luz Marina Díaz, delegada de la Mesa de enfoque Mujer

Saluda cordialmente a todos los miembros. Al igual que sus compañeros, indica que está muy preocupada sobre el tema de seguridad. Señala que para las mujeres el tema de seguridad es primordial porque se ha aumentado el tema de amenazas y el tema en el territorio. Asegura que la pandemia las ha dejado como en el limbo. Dice que en el territorio lo que hay son bandas criminales organizadas, y que está preocupada desde el subcomité de prevención y protección en el cual les presentaron el plan de contingencia, en el cual no se veían reflejadas y no sintieron participación. Indica que solicitaron que se mirara con lupa y se hicieran otros aportes, pero no las invitaron. Señala que vienen de un tema de cartografía, que es un mapa de riesgo, y que debería ser el punto de partida de esta administración para continuar, porque quien más que los líderes y lideresas para conocer el territorio y conocer la comunidad y los hechos que pasan.

Expresa preocupación porque en la localidad de Chapinero, donde vive, ha venido denunciando un tema de trata de personas, microtráfico y el uso de niños, niñas y adolescentes que no tuvieron como acceder a educación virtual, y los están utilizando para venderlos como prostitución e igualmente a los migrantes que los tiene focalizados, y al indagar en la comunidad y al denunciar ante Fiscalía, no ha pasado nada. Asegura que llegó el tema de amenazas y le tocó salir corriendo de la localidad, pues llegaron unas personas a la 1:00am en un taxi, e igualmente a la sede de la fundación en Kennedy han llegado a buscarle, pero no pasa nada en Bogotá. Entonces pide ella a la alcaldesa el favor, pues desde la mesa de enfoque mujeres todas están amenazadas de todos los territorios. En esa mesa hacen parte todas las localidades de Bogotá. El viernes anterior, indica que hubo reunión en Secretaría de Gobierno y las mujeres no querían salir, y se tomaron hasta las 9:00pm esperando solución en el tema de seguridad con lo que está pasando en Bogotá. Finaliza diciendo que muy preocupada por lo dicho por el coronel y el secretario de seguridad que dicen que no

hay bandas criminales organizadas, porque ella los ha denunciado y no ha pasado nada.

Interviene le Mayor William Guerrero, Coordinador de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana

Saluda cordialmente a todos y especialmente a las víctimas. Señala que lamenta profundamente, pero siguen trabajando desde la oficina de derechos humanos de la MEBOG, y es importante hacer precisión que todas las actividades desarrollada en torno de las advertencias de riesgo en las alertas tempranas, constituyen para la MEBOG toda una línea de trabajo iniciando con 26 estrategias operacionales de inteligencia con el fin de detectar situación de riesgo y coadyuvar al modelo de vigilancia por cuadrante.

Indica que es importante generar precisión de la situación de amenaza como un medio que busca desestabilizar a las personas y generar zozobra e incertidumbre a quienes llegan. Indica que se han generado 15.538 medidas preventivas de seguridad, pero con un enfoque especial donde tienen 50 medidas preventivas implementadas a líderes y lideresas sociales en las diferentes tipologías de líderes de la ciudad. Expresa que están trabajando porque les preocupa y siguen las directrices del gobierno distrital para generar acciones que identifiquen y esclarezcan todos los hechos para presentarlos a la opinión pública. Señala que la Policía Nacional cuenta con cuerpo élite en articulación del PAO - Plan de Acción Oportuna, con el fin de generar, articulación de todas las instituciones, UNP, Ejército Nacional. En eso trabajan arduamente, con los diferentes enfoques diferenciales que hay desde la oficina y el grupo de DDHH y en especial las directrices del coronel están generando no solo medidas preventivas, sino también acción de protección en coordinación con la UNP, y siguen trabajando, desarrollando acciones que puedan entrar no solamente a mitigar las situaciones de riesgo, sino, activando rutas en articulación, con toda la información que llega, a veces por la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Cuenta sobre 2 acciones en el sector de Palermo y La Paz, donde llegaron a atender la situación. Indica que sí están actuando, sí entienden que es un mecanismo que persiste, pero se están empleando mecanismos interinstitucionales para poder neutralizar este flagelo que de verdad preocupa a todos ya todas, pero entienden que toca generar acciones y presentar a la opinión pública los resultados.

Interviene Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López

Indica que se suma a las voces de preocupación de las víctimas en el siguiente sentido y explica: Desafortunadamente el concepto de seguridad planteado en la ley y reglamentado es bastante inflexible, es como un blanco o negro ¿Hay o no hay control territorial social y económico de un grupo armado ilegal en el conjunto del territorio, sí o no? Explica que es una pregunta inflexible, y ante ella como pregunta, la respuesta es no, para el caso de Bogotá. Pero, eso desconoce los matices y amenazas que han manifestado las víctimas. Señala que quiere manifestar desde la alcaldía mayor la preocupación de lo que considera una manipulación de los conceptos de seguridad por Ministerio de Defensa y solicita aclaración. Indica que el Ministerio no ha dudado, sin evidencia alguna de que haya presentado los consejos de seguridad en Bogotá, en afirmar que grupos armados ilegales como el ELN planean y ejecutan acciones como la supuesta toma de CAIs del 9 de septiembre. Lo afirmaron sin prueba alguna, y la alcaldesa critica que para afirmar eso si dicen que hay presencia del ELN, pero para venir al CDJT a ver si hay o no control territorial por parte del ELN dicen que no. Pregunta que si cuando les conviene sí y cuando les conviene no. De manera que le pide al Ministerio que aclare ante la Alcaldía y el comité cuál es su posición y en que se sustenta, porque no puede tener una versión manipulada cuando le conviene en un sentido y cuando no le conviene en otro.

Indica Segundo: expresa que no se hace mención acerca de que haya una organización armada ilegal que reiteradamente haya emitido amenazas contra líderes sociales, contra dirigentes políticos e incluso contra la misma alcaldesa, sin que exista pronunciamiento del Ministerio de Defensa y Fuerza Pública. Esa organización autodenominada “águilas negras, bloque capital”, señala que personalmente como alcaldesa ha recibido, por lo menos, 2 panfletos amenazantes de esa organización. Expresa su consideración con los líderes y lideresas. De hecho, afirma, en los panfletos, públicamente conocidos se menciona, explícitamente, los nombres de varios líderes y lideresas, líderes comunitarios, políticos de la ciudad. ¿Qué concepto tiene el Ministerio de Defensa sobre eso? ¿Existe o no existe ese Grupo Armado Ilegal? Porque, indica que, hay 7 publicaciones amenazantes de esa organización contra líderes y lideresas de la ciudad, solo en este año. Sin embargo, en ningún consejo de seguridad, a lo largo de este año, ni en este CDJT el Ministerio de Defensa reconoce o se ha pronunciado sobre si existe o no esa organización. Pregunta ¿con qué fundamento se puede decir que esas amenazas son infundadas, qué investigaciones existen y que evidencias pueden sustentar ante este Comité?

Señala que quisiera explicación acerca del concepto de seguridad, por un lado, es supremamente inflexible y genérico, pero, por otro lado, se tiene evidencia como lo que acaba de mencionar, más lo manifestado por el Ministerio Público y que las víctimas

comparten, y que obliga a pedirle precisión a quien rige este concepto y reglamentó el pronunciamiento sobre este concepto que es el Ministerio de Defensa, porque hay por lo menos 3 inconsistencias, como las mencionadas.

Señala que es muy importante plantear 2 cosas: una de corto y una de mediano plazo.

A corto plazo, solicita al Ministerio de Defensa que nos radique por escrito su interpretación en concreto de las amenazas y de porqué en una ocasión dice que sí hay presencia del ELN y en otras dice que no. ¿O la hay o no la hay?, ¿O planearon la toma continuada de 72 CAI o no la planearon?, pero nos pueden venir a decir cuando les conviene que sí y cuando no les conviene que no.

Solicita y propone al Comité, entendiendo que se existen límites legales en el tiempo, pero preferirá, que esa claridad, sobre la presencia o no presencia, control o no control del ELN por parte del Ministerio de Defensa se aclare. ¿Qué concepto le da a este comité, el ministerio de defensa sobre la supuesta organización ilegal, águilas negras bloque capital? ¿Qué valoración tienen? ¿Tienen o no presencia aquí? Esas amenazas que son ciertas, que han recibido líderes y lideresas, incluso la alcaldesa, ¿tiene o no tienen fundamento?, incluso, ¿con qué fundamento y evidencia el ministerio de defensa la descarta?

Luego, expresa a las víctimas que hay que distinguir 2 tipos de hechos: En este CDJT y frente a este concepto en particular, no se pregunta si existen o no amenazas a la integridad o la vida de ciudadanos en la ciudad, esa no es la pregunta que se nos está haciendo, si esa fuera la pregunta la respuesta sería sí, si hay amenazas. La pregunta que se plantea, y eso es lo inflexible de concepto como lo ha determinado la ley, es ¿sí, en Bogotá hay control territorial social y económico por un grupo armado ilegal? Señala que son preguntas distintas, ambas serias, pero distintas. Frente a la pregunta por las amenazas a las víctimas la respuesta del mayor ha sido sí, por supuesto, las hay, hay conocimiento de amenazas e investigaciones de inteligencia y fiscalía al respecto. La pregunta sobre el concepto de seguridad la pregunta es más genérica e inflexible, es otro tipo de pregunta.

Reitera que de corto plazo quisiera pedir a Ministerio de Defensa que sustente por escrito ante el comité, antes de tener que tomar una decisión sobre el concepto, ¿cómo define el concepto?, ¿a qué tipo de organizaciones armadas ilegales se está refiriendo?, ¿qué entiende por control territorial?, ¿qué entiende por control social?, ¿qué entiende por control económico?, y ¿por qué aquí, a diferencia y en contradicción con cosas que ha dicho ante la opinión pública, dice que no hay y nos solicita que digamos en nuestro concepto de seguridad, y que solicita que digamos en nuestro

concepto de seguridad, que no existe ese tipo de control cuando eso contradice afirmaciones del Ministerio de Defensa en este mismo año. Pide aclaración por escrito y en detalle no la sustenten ante el comité antes de tomar una decisión.

En el mediano plazo, para el próximo comité, también pide al Ministerio de Defensa, que es quien rige el concepto, y la alcaldesa no puede cambiar esto; que aclare ¿cuál es el alcance de interpretación, no global que se pueda tener del concepto?, es decir, si esa evaluación admite o no matices, y expone un ejemplo para darse a entender:

En Bogotá, y eso si se ha analizado en los concejos de seguridad, con ocasión al tamaño de su población y económica, que es casi el 30% del PIB del país, con lo cual, por su tamaño económico, presenta altos riesgos de generación y de lavado de rentas criminales. Ese lavado de rentas criminales, presenta en Bogotá y otras ciudades del país, fenómenos como el llamado “préstamos de gota a gota”, este año en particular ha sido reconocido como un fenómeno preocupante, creciente y que está alrededor de infraestructuras como las plazas de mercado Distrital. Solicita que se ilustre, y plantea que, si el gota a gota es un sistema de préstamo que involucra a cientos de miles de personas, que implican el lavado de una renta criminal y por lo tanto el condicionamiento social y económico de un alto volumen de la población, ¿No sería el gota a gota un caso de eventual control de carácter económico y social de un conjunto de actores ilegales en Bogotá? Pregunta ¿En dónde queda ese ejemplo al interior de concepto de seguridad? Explica que ese es un fenómeno criminal que implica alto cubrimiento social y económico de población a través de actividad ilegal, de lavado de activos, que tiene connotaciones criminales, como el alto número de amenazas o incluso hechos sicariales pueden estar relacionados con amenaza de recaudo del gota a gota. Concluye que tienen consecuencias en la ciudad y son graves. Pregunta ¿eso está o no dentro del concepto de seguridad o si son cosas distintas? Explica que ella no entiende la frontera que hace el Ministerio de Defensa; cual es la frontera para distinguir dentro del Concepto que tiene su propio marco normativo, pues desde ese punto de vista es claro que Bogotá es una ciudad segura para las víctimas, por algo hay 400 mil víctimas residentes en la capital. Pueda que no sean óptimas las condiciones de seguridad para los procesos de retornos, reubicación, pero se trabaja en mejorar los procesos de caracterización. Señala que entiende las particularidades legales del concepto, pero si solicita mucha precisión por parte del Ministerio de Defensa en los dos sentidos, en que se abarca dentro del concepto de seguridad y que no se abarca pero que se reconozca como parte de los desafíos de seguridad de la ciudad, aunque en el marco normativo vigente no se atañe específicamente a este concepto, insiste, bastante inflexible.

Expresa que son fronteras importantes de establecer, no solo por efectos de la política de seguridad, sino también para que se sepa en qué espacio se está discutiendo qué, y qué implicaciones tiene una decisión cuando se adopta, en el contacto del comité, y si hay situaciones que se reconocen como de afectación a la seguridad en Bogotá, pero que no hacen parte normativamente del objeto de este comité y este concepto, entonces en que espacio están serán tratadas. Explica que se pone en los zapatos de las víctimas y las entiende; pues hay ciertas amenazas que la Policía Nacional reconoce que, sí son preocupantes y que investiga, pero, eso no es objeto aparentemente de este comité, entonces en que espacio se discute, preguntan las víctimas, lo hace con razón. Señala que ese es el propósito del espacio, porque de lo contrario, hay una desconexión constante entre ciertas preocupaciones que tienen las víctimas, pero sobre los cuales no se ofrece respuesta en este escenario. Expresa que, si la respuesta es que este escenario tiene unas restricciones legales, la alcaldesa asume que se entienda por parte de las víctimas, pero entonces los otros temas, en donde se tratan, estando todas las autoridades competentes como las que están en el CDJT.

Asegura que frente a ese reclamo hay que dar una respuesta, que seguro se articulará entre las instituciones del comité, y que las víctimas han planteado.

Señala que como hay un marco legal, que depende de las directrices del Ministerio de Defensa, a riesgo de aplazar unos días la decisión sobre el Concepto de Seguridad, les ruega que radiquen una respuesta a las inquietudes planteadas y pregunta ¿hasta cuándo hay plazo de tomar la decisión que el comité debe tomar?, por supuesto sin sobrepasar los términos legales.

El Alto Consejero aclara que la propuesta de la Alcaldesa de suspender la emisión del concepto de seguridad, se puede someter a votación en el CDJT, lo que implicaría que el Plan de Retornos y Reubicaciones no étnico, no tendría efecto hasta que se apruebe el concepto de seguridad en un próximo comité. Explica que sus efectos solo se podrían ver después que se implementen con el concepto de seguridad aprobado.

Se discute sobre el tiempo en que se suspenderían los efectos de este plan de retorno, y la alcaldesa pregunta ¿si hoy se acuerda suspender esta sesión, para que el Ministerio de Defensa pueda traer las precisiones que se han solicitado, se podría legalmente tener la posibilidad de suspender y hacer otra sesión este mismo año?

El Alto Consejero contesta que sí, que en el mes de diciembre.

La alcaldesa indica que entonces, con esas claridades, deja sobre la mesa la propuesta de suspender la decisión de hoy, hacer las solicitudes de claridades con el Ministerio de Defensa y se compromete a convocar de nuevo en diciembre al CDJT para tomar la decisión de manera más informada. Indica que se decidirá sobre todo lo que se pueda decidir y es la decisión del concepto en concreto lo que debería quedar para la próxima sesión.

Interviene el Ministerio Público

Señala que le parece audaz y acertada la propuesta de la alcaldesa, puesto que se comparte el pronunciamiento hecho por Ministerio Público. Señala que siempre votan abstención sobre concepto de seguridad porque hacen el seguimiento a la política pública y no pueden ser juez y parte en este concepto, pero cree importante el precedente que deja para la ciudad frente a la ambigüedad entre el concepto de seguridad como existencia del conflicto armado en el territorio y la presentación que se hace para los escenarios de la ciudad de Bogotá y en ese sentido le parece acertada la decisión que podría llegar a tomarse

Interviene Directora UARIV Territorial Central

Indica que se acogen a la propuesta de la alcaldesa, en el sentido de esperar recibir por parte del Ministerio de Defensa las respuestas a las inquietudes, no obstante ello, sobre la aprobación del Plan de Retornos, se puede presentar y dado que adicionalmente al principio de seguridad se presentan otros elementos importantes, que habría que tener en cuenta, considera que se debe presentar el Plan de Retornos y Reubicaciones, aunque lo deja a consideración de la presidenta de la sesión.

El Alto Consejero indica que en este momento se le solicita al comité manifestarse a favor o en contra de la propuesta realizada para la suspensión de la aprobación del concepto de seguridad hasta tanto el Ministerio de Defensa aclare los puntos ya solicitados por la Alcaldesa Mayor, en su intervención, en el entendido de que sería una solicitud del comité en su conjunto, por tanto, si los miembros del comité van a solicitar esta suspensión, entonces manifestar Sí, de lo contrario contestar No. Solicita a la moderación llamar a lista para la votación sobre esto:

Antes de empezar, la moderadora, Ana María Sánchez, pregunta al Ministerio Público si para esta votación, van a votar y a la respuesta positiva del Dr. Rafael Navarro, comienza con la votación nominal.

N°	NOMBRE	CARGO / ENTIDAD	QUÓRUM		Suspensión de aprobación Concepto de Seguridad		Abstención
			SI	No	SI	No	
1	Claudia López	Alcaldesa Mayor de Bogotá	x		x		
2	Carlos Vladimir Rodríguez	Alto Consejero	x		x		
		Alta consejería para los derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación					
3	Margarita Barraquer	Secretaria	x		x		
		Secretaría General					
4	Luis Ernesto Gómez	Secretario	x		x		
		Secretaría de Gobierno					
5	Marcela Marquez (E)	Secretaria	x		x		
		Secretaría de Planeación					
6	Alejandro Gómez	Secretario	x		x		
		Secretaría de Salud					
7	Edna Bonilla	Secretaria	x		x		
		Secretaría de Educación					
8	Carolina Durán	Secretaria	x		x		
		Secretaría de Desarrollo Económico					
9	Xinia Navarro	Secretaria	x		x		
		Secretaría Distrital de Integración Social					
10	Nicolás Montero	Secretario	x		x		

N°	NOMBRE	CARGO /ENTIDAD	QUÓRUM		Suspensión de aprobación Concepto de Seguridad		Abstención
			SI	No	SI	No	
		Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte					
11	Nadya Rangel	Secretaria					
		Secretaría Distrital del Hábitat	x		x		
12	Juan Mauricio Ramírez	Secretario					
		Secretaría de Hacienda	x		x		
13	Diana Rodríguez	Secretaria					
		Secretaría Distrital de la Mujer	x		x		
14	Libardo Asprilla	Director					
		Instituto Distrital para la Economía Social - IPES	x		x		
15	Oscar Gómez	Comandante					
		Policía Metropolitana de Bogotá	x		x		
16	Oscar Rey	Comandante					
		Brigada XIII del Ejército Nacional	x		x		
17	Diana Arboleda Ramírez	Directora					
		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Regional Bogotá	x		x		
18	Enrique Romero Contreras	Director					
		Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA					
19	Francisco Javier Alonso	Funcionario delegado	x		x		

N°	NOMBRE	CARGO /ENTIDAD	QUÓRUM		Suspensión de aprobación Concepto de Seguridad		Abstención
			SI	No	SI	No	
		Procuraduría Distrital de Bogotá					
20	Arlez Mogollón	Personería Distrital	x		x		
		Personero Delegado para la Protección de Víctimas					
21	Rafael Hernando Navarro	Defensoría de Pueblo	x		x		
		Defensor					
22	María José Dangond	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	x		x		
		Directora TC					
23	Rossvan Johan Blanco Castelblanco	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas	x		x		
		Director Territorial					
24	Sandra Bonilla	Delegada		x			
		Mesa Distrital de Víctimas					
25	John Alexis Gómez	Delegado	x		x		
		Mesa Distrital de Víctimas					
26	María Fernanda Arboleda	Delegada Mesa Distrital de Víctimas- Organizaciones de Mujeres Víctimas	x		x		
27	Julisa Mosquera	Delegada Mesa de participación de las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras	x		x		
28	Paulina Majin	Delegada Mesa de participación de los pueblos y comunidades	x		x		

N°	NOMBRE	CARGO /ENTIDAD	QUÓRUM		Suspensión de aprobación Concepto de Seguridad		Abstención
			SI	No	SI	No	
		Indígenas					
29	Dalila Gómez	Comunidades Gitana o Rrom		x			

La moderadora pregunta, por solicitud de la Alcaldesa, nuevamente los votos de la MEBOG y del Ejercito, posterior al voto positivo de estos por aplazar la aprobación del Concepto de Seguridad, el Alto Consejero informa que se ha aprobado por unanimidad la suspensión del concepto de Seguridad y pide proseguir con el Plan de Retornos y Reubicaciones, haciendo la claridad que el Secretario de Salud y el de Planeación votaron si por el chat de la reunión virtual.

La moderadora informa que son 26 votos a favor de la solicitud del comité en pleno, de aplazar la aprobación del concepto y da paso al punto 5, presentación y aprobación del Plan de Retornos y Reubicaciones no étnico y da la palabra al Alto Consejero, quien pide que se proyecte la presentación para visualización de los miembros del comité.

5°. Presentación y aprobación del Plan de Retornos y Reubicaciones no Étnico

Proyectada la presentación, el Alto Consejero se refiere la presentación del Plan de Retornos y Reubicaciones no Étnico – PRRNE – periodo 2020 2024 en donde el principal objetivo de este es definir la puesta intersectorial del distrito en articulación con la nación encaminada a viabilizar 1) los escenarios de retorno al municipio expulsor. 2) la reubicación en un lugar distinto al que fue desplazada la víctima o la reubicación en Bogotá, denominada integración local. Los retornos y reubicaciones a entes territoriales diferentes a Bogotá, se deben coordinar con la UARIV, así como la llegada de la población objetivo a las entidades territoriales escogidas. También, mediar con las autoridades locales que faciliten los retornos y reubicaciones previa aprobación del concepto de seguridad. La integración local determina que el distrito propone condiciones de acompañamiento para que las víctimas del desplazamiento forzado avancen en su proceso de estabilización socioeconómica y de generación de capacidades y competencias, en esta propuesta para que se integre de manera efectiva en los territorios que han decidido permanecer y se logre consolidar sus procesos de arraigo.

El plan consta de 3 procesos:

El primero es que a través de la ACDVPR y la articulación con las entidades del SDARIV la administración pretende disminuir el limbo asistencial de las víctimas del conflicto armado y facilitar el proceso de acceso a la ruta de reparación integral, el PRRNE se realiza y propone en el marco de la ley 1448 del 2011, del Decreto 1084 del 2015 y la resolución 3320 del 2019.

Como segundo propósito tiene una apuesta intersectorial construida en articulación con entidades del orden distrital y nacional, y trabajado en diferentes subcomités con delegados y delegadas de organizaciones y mesa de víctimas.

El tercer componente es el aporte a la reparación integral de las víctimas, a través de acciones orientadas a la superación de la situación de vulnerabilidad y el fomento del arraigo territorial.

Expresa que la construcción se dio a partir de un ejercicio participativo en el cual estuvieron delegados de las mesas de víctimas, en reuniones presenciales y virtuales y se generó un proceso participativo vía digital, a raíz de las situaciones derivadas del covid-19. En el ejercicio surgieron la identificación de una serie de problemas, incluida la falta de pedagogía, la ausencia de acciones de estabilización económica, la desarticulación institucional nación territorio y la debilidad en el seguimiento de acciones. De estos problemas trabajados se presentaron 6 propuestas que hoy se presentan para su aprobación, entre las cuales se destaca la articulación con la nación para el proceso de RyR que tiene el compromiso por parte de la nación el de fortalecer la entrega de la indemnización administrativa, que corresponde a la nación, el fortalecimiento de los procesos sancionatorios y de revocatoria de subsidios en los proyectos de vivienda, en los casos identificados como problemáticos en la entrega de subsidios, propender por la utilización de bienes incautados para el desarrollo de lugares de trabajo colectivos, la promoción, acceso y permanencia en programas de educación técnica y profesional a partir de la articulación con oferta distrital y diferentes fondos de educación, alianzas con sector privado para comercialización de productos y vinculación laboral, así como la priorización de familias con restitución de tierras en articulación con las entidades competentes.

Comenta que El PRRNE, establece unas rutas y unos compromisos del distrito para las víctimas que quieren retornar, reubicarse o reintegrarse localmente. También ordenar la oferta del PAD con relación a las rutas de atención, asistencia y reparación. Establece los universos de atención y criterios de priorización con los que trabajará la

actual administración, basados en los principios de voluntariedad, seguridad, y el principio del plan, son responsabilidades de articulación distrito nación dejando claras las competencias de las entidades convocadas para el mismo.

Señala que está claro que este PRRNE tiene los pilares del PRR, en tanto lo que ordena la Corte en diferentes sentencias en clave de garantizar los derechos de las víctimas, dentro del proceso, la voluntariedad, la seguridad y la dignidad, y esa articulado intersectorialmente que permite acceso gradual a derechos prioritarios: alimentación; alojamiento, identificación, educación, reunificación familiar, generación de ingresos, acompañamiento psicosocial que son de responsabilidad compartida con la nación, el distrito propone la hoja de ruta, pero la nación debe concurrir en el marco de sus competencias con la estabilización socioeconómica en clave de reubicación o favorecimiento de condiciones de retorno en condiciones dignas.

En ese sentido, asevera, los pilares mencionados permiten avanzar en clave de derechos progresivos, en temas de tierras, de vías y comunicaciones, de servicios públicos básicos, de seguridad alimentaria, de ingreso y trabajo, y de seguridad social, reiterando que el ejercicio es articulado con la concurrencia de la nación.

Explica que se tiene identificado las diferentes competencias a nivel nacional y distrital, así como los momentos dentro del plan. Algo importante es que existe un déficit en el acta de voluntariedad, es decir, las víctimas, tiene un déficit profundo en esta acta, que es la puerta de entrada, pues es la manifestación que se materializa a través de acta de voluntariedad, en ese sentido, el primer momento es saber cuántos y quiénes son, para de esa manera empezar la ruta diferencial. En el plan queda claro para que cada entidad empiece según su competencia el proceso de orientación posterior verificación de viabilidad del acompañamiento para posteriormente entrar a la fase de planeación del acompañamiento del retorno, la reubicación o la integración local. Una de las 3 rutas que se debe conjuntamente implementar. Allí se puede ver, según la sentencias de la Corte que reglamentan, en cuales temas debe el nivel nacional asegurar el goce efectivo de derechos y el cumplimiento para las víctimas del conflicto armado, y también en que concurre el nivel distrital con su oferta a partir del plan de acción distrital y la articulación de las diferentes entidades de sistema distrital, articulación y reparación a víctimas, el quinto momento del plan es el desarrollo del acompañamiento y un sexto momento transversal, que es el balance del acompañamiento, donde se realiza y se solicita el acompañamiento, para poder evaluar las distintas fases de implementación del modelo del plan. Señala que las víctimas saben que es una novedad, el hecho de establecer claramente las rutas competencias responsabilidades

distrito nación y poderlas implementar en una fase que empieza con el acta de voluntariedad y con el establecimiento de los procesos RRI.

Explica que se tienen como universo de atención, primero un universo por oferta, en el cual, las personas que tengan acta de voluntariedad, o que se avance en la misma, o que tengan proyectos de vivienda o sean sujetos de reparación colectiva, tienen un universo por oferta para entrar en las rutas establecidas, y en los momentos determinados. Otro universo por demanda, donde están las víctimas que salen de la ruta de atención humanitaria inmediata, en la cual el distrito tiene competencia hasta 90 días, una vez sale el registro, las víctimas, entran en situación de fortalecimiento a su proceso de ayuda humanitaria de emergencia o de reparación desde la nación y el distrito acompaña el ejercicio. Un tercer universo establecido por criterios de priorización, se refiere a personas que superaron la situación de vulnerabilidad, asentadas en las UPZ de PDET, que son aprox. 47.768 personas, y que se ha venido actualizando y categorizando, y el distrito está construyendo su propio sistema de información punto a punto para determinar las cifras corroboradas, y tercero, señala, las víctimas con residencia de más de 10 años, 153.921 personas sufrieron desplazamiento hace 10 o más años, y es importante revisar quienes han superado la situación de vulnerabilidad y quienes no, o no les fue medida su situación y con base en ese universo de atención, entra por uno de los procesos ya discutidos en anteriores subcomités.

Se permite aclarar que este es el marco general de PRRNE, y aquí no están contempladas las particularidades del decreto 4633, 4634, 4635 ni las concertaciones en el marco del artículo 66 del PDD.

Las rutas contienen 4 fases. La primera es la garantía de la subsistencia mínima mediante con la entrega de atención humanitaria inmediata. Modalidad de albergue hasta por 90 días. La segunda fase es la garantía mediante la modalidad de arriendo y alimentación a la población declarante de hechos recientes en el marco del Conflicto armado. Una tercera fase, que es la fase preparatoria, y está orientada a la estabilización social y económica de las víctimas y generación de capacidades y competencias. Comprende la vinculación a la oferta general del distrito, que es la que se tiene con la oferta general en el PAD, y que contribuya a la toma de decisiones de la población víctima. La cuarta fase es el acompañamiento institucional, donde se prioriza el acceso a la oferta especializada del distrito, que implica que aquellas víctimas que decidieron presentarse en Bogotá, se debe apoyar la sostenibilidad según la competencia de cada uno de los sectores, para generar y garantizar la integración local en el marco de los principios del PDD. Por último, el eje transversal en la ruta de

reparación integral que contempla acciones de prevención temprana, prevención urgente y protección que se pueden activar de manera transversal durante todas las fases de la ruta con un enfoque diferencial de género y sexualidades no hegemónicas que se ha incluido en la hoja de ruta del PRR por primera vez desde que se utiliza la herramienta, garantizando los derechos a la vida, la libertad personal y la integridad.

Explica que con este plan se pretende aportar en la disminución del limbo asistencial en que se encuentra la población víctima en la actualidad, donde lleva mucho tiempo en Bogotá, accediendo a oferta de manera dispersa, desordenada, y no existe ruta que permita establecer un plan de integración o de retorno claro, para la población no étnica. Y para poder favorecer ese proceso, se necesita un PRR que parta del acta de voluntariedad y pase por las diferentes fases ya mencionadas.

La ruta que contribuye a la Fase 3, se organizó la oferta del PAD en función de su aporte a las superaciones de vulnerabilidad, y en ese sentido, el proceso de arraigo territorial tiene 5 sectores estratégicos que configuran oferta especializada para el componente de integración local y arraigo comunitario: sector hábitat, educación, integración social, desarrollo económico y cultura. Más 6 entidades en materia de participación con 17 mesas asociadas: IDEPAC, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Integración Social, que confluye en ambas fases, articulado y armonizados desde el PAD y el aporte de los ODS.

Se tiene también diferenciada la oferta institucional que contribuye a la integración comunitaria y arraigo territorial. Son 11 metas del sector desarrollo económico en clave de la recuperación económica Pos- Covid, constituye el eje central para la estabilización socioeconómica de las personas que han decidido permanecer de manera indefinida en Bogotá. Sin esta oferta, se comprendió desde la consejería, que la única manera de promover el proceso es a través de la estabilización socioeconómica y por eso las 11 metas son centrales, donde la SDDE y el IPES son quienes tienen este eje central para esa estabilización, sin ir en menoscabo de las demás metas y marco de acción presupuestal.

Las apuestas del sector cultura, contemplan en el plan una oferta de carácter diferencial, territorial y poblacional que está destinada a la población que ingrese a la ruta. Ello va muy en línea de lo que se ha planteado desde la alcaldesa y es que el sector fundamental para favorecer la integración social es el sector cultura, recreación y deporte, y el sector tiene una apuesta estratégica en la fase 3 de estabilización para quienes decidan reubicarse o generar proceso de integración local y no estén en la ruta de retorno.

La moderadora indica que otorga espacios para comentarios al PRRNE por parte de asistentes y se recuerda que se cuenta con 3 minutos

Interviene Delegada María Fernanda Arboleda

Señala que es preocupante el tema de reubicación el distrito de Bogotá, sobre los 5 puntos, como lo son el tema de vivienda, de salud, de educación, trabajo digno, proyectos productivos y sanación a las víctimas. Indica que no se ve reflejado el tema de justicia, reparación integral, verdad y derecho a no repetición. Explica que, al respecto, se viene presentando una constante amenaza como se expuso en el tema de seguridad y desde el distrito no hay una responsabilidad acorde para que las víctimas que se deseen quedar en el distrito tengan una ratificación para el tema de No Repetición. Dice que se ha solicitado explícitamente que se haga una caracterización real de las víctimas, como se está presentando toda esa situación en los territorios, y que se ha solicitado la formulación de la política pública de víctimas para ratificar todo lo que dicen los autos y sentencias. Expresa que no hay una ruta de atención que caracterice a las mujeres, víctimas mayores, quienes presentan situación de discapacidad, y otras personas, como lo son las cuidadoras, madres cabeza de hogar, toda la situación frente a la normatividad que hace referencia para tener los 5 puntos que son reparación integral, reparación simbólica, justicia, verdad y ese tema.

Expresa que no se ve reflejado en ese plan las personas que quieran quedarse voluntariamente en Bogotá. Señala que asiste pero que en el subcomité los compañeros se retiraron y fue una decisión como mesa, donde el tema de prevención y protección también lo ratificaron en el Subcomité respectivo.

Se solicitó una mesa de trabajo técnica, y no se tuvo respuesta alguna sobre el direccionamiento del trabajo que se hizo como institución en la solicitud en ese espacio.

Interviene Delegado John Alexis Gómez

Pregunta ¿cuál es la articulación de la alcaldía con la UARIV y el SDARIV para llegar a ese tema de RyR? Porque observa que por parte de la UARIV a nivel nacional el tema es diferente, por tanto, solicita aclaración sobre esta articulación.

Interviene Delegada Luz Marina Díaz

Pregunta, en primera instancia ¿cuál es el presupuesto real de la administración distrital para este retorno y reubicación? Segundo, el tema de vivienda, ¿dónde hay

oferta en VIS y VIP, pero las víctimas no tienen un empleo estable, sino que viven del día a día?, y frente al tema de emergencia por la pandemia, muchas víctimas recientes en el distrito, viéndose en la necesidad de no tener recursos, quieren retornar, y lo dice porque en muchas ocasiones la comunidad se ha manifestado no solo en la mesa de mujeres, sino también en las mesas afro, indígena, y que han manifestado la intención de retornar porque en este tiempo que se ven abandonados y lo han manifestado.

Interviene el Alto Consejero

Indica que la articulación con la UARIV precisamente parte de este PRR, pues es la hoja de ruta para la articulación. Es clave tener claras las competencias del ente territorial y de los diferentes entes de la nación. Señala que la hoja de ruta implica poner cuáles son los momentos, cuáles, con las competencias, cuál es la concurrencia y qué le corresponde a la nación y al distrito. La aprobación de este plan hace de obligatorio cumplimiento para todos los competentes del plan presentado en las 6 fases del PRR incluyendo en enfoque de género y no incluyendo los elementos de los planes de retorno y reubicaciones étnicos. Explica que hay diferencia, porque la administración distrital tiene un enfoque totalmente diferente a la atención humanitaria inmediata y lo que se quiere es generar capacidades ciudadanas.

Frente a lo plantado por Luz Marina, indica que la hoja de ruta en términos presupuestales es el PAD. Reconoce que hay elementos que exceden la capacidad fiscal del distrito, aunque se sabe son deudas históricas con las víctimas en todo el país. Sin embargo, con base en la voluntad política y la capacidad técnica del distrito y sus secretarías, se ha aprobado un PAD con un recurso y unas metas que antes no existían. Reconoce una situación particular con la vivienda, que tiene relación con fenómenos en el distrito, de posibilidades de tierra, de acceso, cierres financieros. Sin embargo, hábitat ha establecido un plan de mejora partiendo de la oferta del PAD, de las 2.000 viviendas, que son la cifra base y no techo, y con base en ese proceso y la armonización de los territorios PDET se espera poder ampliar esa oferta antes de que concluya el cuatrienio.

Sobre el tema que planteó la delegada María Fernanda, indica que es el plan de retornos y reubicaciones no étnico, y no es la apuesta de coordinación de política social y de atención a víctimas, porque esta está en el marco del PAD y otros procesos y el PRR se circunscribe únicamente al proceso, la metodología y a las fases, ya sea del retorno o de la integración local. También se sabe que existe el principio de la buena fe de aquellas víctimas que llevan mucho en Bogotá, y por ende deberían ser comprendidas como en proceso de reubicación, pero esto no se puede hacer sin que

pase por el acta de voluntariedad, que es donde se hace la caracterización que se pide por parte de la delegada. Por tanto, allí también se determina la ruta diferencial

Expresa que desde la ACDVPR se ha venido avanzando de manera sólida en la depuración del sistema de información, que se espera conversar en próximo comité, y es un reto grande y difícil, pero es la única manera de ordenar la oferta saber la cantidad y ubicación para poder aplicar criterios de priorización.

Interviene la delegada Luz Marina

Precisa que lo que quiere saber es ¿cuánto es el recurso que tiene la ACDVPR para retornos y reubicaciones de víctimas residentes en Bogotá?

Interviene el Alto Consejero

El Alto consejero responde que esa pregunta se responde en la ruta. El presupuesto del distrito para la atención de las víctimas es 1.8 billones. El retorno, la reubicación o la integración local, cada una, entra dentro de ese presupuesto. Menciona, para dar claridad, que el proceso de retorno, reubicación o reintegración, es un proceso en concurrencia con la nación, por tanto 1.8 billones es el presupuesto que dispone el distrito y espera la cifra que aporte la nación, y esa suma será el presupuesto para atención a víctimas durante el cuatrienio.

Interviene la alcaldesa Distrital

Esperamos que el aporte de la Nación sea equivalente con el presupuesto de la Alcaldía, es decir, un peso por un peso.

Interviene el Alto Consejero

Alcaldesa yo espero que por el contrario que el aporte de Nación sea dos por uno, frente al presupuesto de la Alcaldía.

Interviene la alcaldesa Distrital

Indica que solo quiere hacer una aclaración, y es que este es el plan de retornos y reubicaciones no étnico, pero no uno de verdad, justicia, reparación y garantías de no

repetición, ese no es su alcance. El PAD, en cambio, si hace una atención integral a las víctimas conforme a lo que determina la ley y asegura es el más ambicioso en la historia de la atención a las víctimas en la capital. Este tiene un objeto más preciso, es solo sobre retornos y reubicación no étnico.

Interviene la Directora de la UARIV

Expresa que desde el gobierno nacional se cuenta con un presupuesto, pero se debe entender que este presupuesto no está delimitado solo para poderlo establecer y definir. Para Bogotá se va a definir un presupuesto establecido, pues este es nacional. No obstante, señala que es importante reafirmar el compromiso de la entidad para seguir trabajando de manera articulada en los planes presentados en el marco del decreto de corresponsabilidad, se trabaja de manera articulada y este plan es uno que contiene una oferta importante que se deba articular y ese es el inicio del proceso. Sin este proceso no se avanza de manera que se pueda dar inicio a la oferta, este es el punto de partida para que pueda existir la articulación que solicitan. Cuenta que la UARIV de manera permanente tiene reuniones con la ACDVPR para poder articular la oferta que se está exponiendo a los integrantes.

Reitera que está claro el presupuesto, que este es de manera nacional, por lo cual es complejo decir una cifra para el retorno y reubicación en Bogotá, pero si espera poder hacer un gran aporte, así como se ha planteado, en el ambicioso plan, y se confía desde el gobierno nacional que se podrá lograr trabajando de manera armónica.

Interviene el Alto Consejero

Indica que se espera poder contar con la información de cuánto dinero hay a nivel nacional y cuánto se podría disponer para el proceso de RyR en Bogotá y la Dr. María José Dangond indica que así es, que entonces es un compromiso establecido para brindar la información y poder informar a la Alcaldesa y al Alto Consejero.

El Consejero realiza énfasis en que el plan presentado corresponde al no étnico y que el Plan de RyR étnico se encuentra en construcción con los pueblos y comunidades con pertenencia étnica presente en Bogotá. Para lo anterior se requiere de ser posible, que la UARIV emita la comunicación de los nuevos lineamientos en aras de retomar en su construcción e implementación los avances normativos.

La moderadora indica que luego de agotada la discusión, es necesario definir la Aprobación del Plan de Retornos y Reubicaciones No Étnico, para lo cual, y en cumplimiento del reglamento del CDJT, se dará inicio a la votación nominal.

El Alto Consejero hace la claridad de que las disposiciones del Plan de retornos y reubicaciones no étnico podrán implementarse a partir de la definición de la favorabilidad o no del concepto de seguridad, que como se acordó antes fue aplazado para la próxima sesión de comité.

Inicia la Votación

N°	NOMBRE	CARGO /ENTIDAD	QUÓRUM		Aprobación del Plan de Retornos y Reubicaciones no Étnico		Abstención
			SI	No	SI	No	
1	Claudia López	Alcaldesa Mayor de Bogotá	x		X		
2	Carlos Vladimir Rodríguez	Alto Consejero	x		X		
		Alta consejería para los derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación					
3	Margarita Barraquer	Secretaria	x		x		
		Secretaría General					
4	Luis Ernesto Gómez	Secretario	x		x		
		Secretaría de Gobierno					
5	Marcela Marquez (E)	Secretaria	x		x		
		Secretaría de Planeación					
6	Alejandro Gómez	Secretario	x		x		
		Secretaría de Salud					
7	Edna Bonilla	Secretaria	x		x		

N°	NOMBRE	CARGO /ENTIDAD	QUÓRUM		Aprobación del Plan de Retornos y Reubicaciones no Étnico		Abstención
			SI	No	SI	No	
		Secretaría de Educación					
8	Carolina Durán	Secretaria					
		Secretaría de Desarrollo Económico	x		x		
9	Xinia Navarro	Secretaria					
		Secretaría Distrital de Integración Social	x		x		
10	Nicolás Montero	Secretario					
		Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	x		x		
11	Nadya Rangel	Secretaria					
		Secretaría Distrital del Hábitat	x		x		
12	Juan Mauricio Ramírez	Secretario					
		Secretaría de Hacienda	x		x		
13	Diana Rodríguez	Secretaria					
		Secretaría Distrital de la Mujer	x		x		
14	Libardo Asprilla	Director					
		Instituto Distrital para la Economía Social - IPES	x		x		
15	Oscar Gómez	Comandante					
		Policía Metropolitana de Bogotá	x		x		
16	Oscar Rey	Comandante	x		x		

N°	NOMBRE	CARGO /ENTIDAD	QUÓRUM		Aprobación del Plan de Retornos y Reubicaciones no Étnico		Abstención
			SI	No	SI	No	
		Brigada 13 del Ejército Nacional					
17	Diana Arboleda Ramírez	Directora					
		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Regional Bogotá	x		x		
18	Enrique Romero Contreras	Director					
		Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA	x		x		
19	Francisco Javier Alonso	Funcionario delegado					
		Procuraduría Distrital de Bogotá	x				x
20	Arlez Mogollón	Personería Distrital					x
		Personero Delegado para la Protección de Víctimas	x				
21	Rafael Hernando Navarro	Defensoría de Pueblo	x				x
		Defensor					
22	Maria Jose Dangond	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas	x		x		
		Directora TC					
23	Rossvan Johan Blanco Castelblanco	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas	x		x		
		Director Territorial					
24	Sandra Bonilla	Delegada		x			

N°	NOMBRE	CARGO /ENTIDAD	QUÓRUM		Aprobación del Plan de Retornos y Reubicaciones no Étnico		Abstención
			SI	No	SI	No	
		Mesa Distrital de Víctimas					
25	John Alexis Gómez	Delegado	x				
		Mesa Distrital de Víctimas					x
26	María Fernanda Arboleda	Delegada Mesa Distrital de Víctimas- Organizaciones de Mujeres Víctimas	x				x
27	Julisa Mosquera	Delegada Mesa de participación de las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras	x		x		
28	Paulina Majin	Delegada Mesa de participación de los pueblos y comunidades indígenas	x		x		
29	Sandro Cristo	Comunidades Gitana o Rrom		x			

La moderadora informa al plenario que la votación cuenta con un quorum de 27 sobre 29 integrantes y ha sido aprobado con 22 votos a favor, 0 votos en contra y 5 abstenciones.

Enseguida señala que se continúa con el orden del día, punto 6to, presentación y aprobación de la actualización del Plan de Contingencia – PC – de Bogotá D.C. para la atención inmediata de emergencias humanitarias producidas o derivadas del conflicto armado interno y otorga la palabra al Alto Consejero Vladimir Rodríguez.

6°. Presentación y aprobación de la actualización del Plan de Contingencia para la Atención Inmediata de Emergencias Humanitarias en Bogotá D.C.

Interviene el Alto Consejero

Para empezar, señala que la actualización del Plan de Contingencia, pasa por el CDJT en cuanto se debe asegurar la elaboración de la puesta en marcha de planes de contingencia para atender las emergencias producidas en el marco del conflicto armado interno en el país, particularmente los masivos, 10 familias o 50 personas en adelante, lo cual se sabe, es Bogotá uno de los ente territoriales más fuertes de recepción de víctimas del conflicto armado.

Señala que se requiere aprobar el Plan de Contingencia -PC- en tanto es una medida de previsión urgente, ya que son acciones enmarcadas en el contexto de una violación de DDHH y con el plan se formula la ruta para brindar atención y ayuda humanitaria inmediata, este regula la fase de inmediatez, hasta los 90 días. La actualización se da en 2 etapas: atención a familias e individuos y atención a eventos masivos.

Expresa que el documento que se envió en el marco de la convocatoria al Comité, contiene un diagnóstico del riesgo de victimización; medidas de asistencia, ayuda y atención humanitaria inmediata; cronograma de actividades de alistamiento para la respuesta en la inmediatez; unos recursos y un árbol de comunicaciones, mediante el cual se completa la ruta presencial a los centros de encuentro de manera virtual. Como anexos: Conceptos Básicos; Aspectos Metodológicos; Protocolos para la Atención a Población Víctima del Conflicto Armado; Rutas para el Acceso a los Diferentes Servicios del Distrito Capital según hecho victimizante, o de violencia sufrido, lo que también es una novedad y se establece una ruta en el componente de atención psicosocial particular y diferencial en caso de ser situación de violencia sexual, desaparición forzada o cualquiera de los 14 hechos victimizantes.

Indica que este PC, es un insumo que permite fortalecer rutas y protocolos de atención para que sean más efectivas y respondan a los riesgos, que se actualicen los instrumentos distritales que permiten abordar los riesgos materiales y actuales y por eso esta actualización permitirá que en un futuro comité, se armonice el PC con el Plan de atención a situaciones riesgo y cambio climático, para que no sean dos planes sino que se permita en el marco del sistema, armonizar e implementar.

El plan también es un insumo para generar un análisis de la situación actual desde los escenarios de riesgo de los diferentes sujetos de especial protección constitucional, insumos que se remitirán a la Secretaría General, de Gobierno, de Seguridad, para poder evaluar de manera permanente los escenarios de riesgo de los sujetos de

especial protección constitucional como lo manda la Corte en diferentes sentencias que ha recogido el distrito en el PDD.

La metodología para la identificación del riesgo es novedosa, en cuanto a que se recogen los insumos que el Ministerio Público y las alertas tempranas brindan, se tiene entonces la evaluación del riesgo a partir de un ejercicio de observación sistemática del mismo, desde una perspectiva cualitativa con un carácter de observación exploratorio y descriptivo, esto con los insumos que se proveen del sistema de información, que se ha venido transformando y planteando.

Indica que, por medio de encuestas previamente diseñadas, que permiten la recopilación de los datos que componen el escenario de riesgo y bajo la ecuación que plantea el Ministerio Público y otros actores, se establecen los factores de amenaza, de vulnerabilidad sobre los factores de protección, entendiendo la amenaza como el peligro que implica la posibilidad de un daño sobre un sujeto o un colectivo, la vulnerabilidad entendida como el nivel de susceptibilidad de las personas a experimentar pérdidas graves y el factor de protección entendido como las disponibilidad de recursos, conocimientos, capacidades y elementos de protección existentes implementados por las instituciones del Estado, y armonizada la herramienta con el futuro plan de protección y protección que está liderando la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y que se armonizará en su momento con la metodología para la identificación del riesgo.

Cuenta que se han recogido las recomendaciones de líderes, lideresas, organizaciones y Ministerio Público, para entender los diferentes niveles de identificación del riesgo que permiten observación por parte de comunidades afrocolombianas e indígenas, las mujeres, población transgénero, los sujetos de reparación colectiva, estos últimos como eje central de la política pública, entendiendo que el conflicto armado no solo derivó en afectaciones individuales, sino que tuvo afectaciones colectivas y la única manera de superar los hechos es el trabajo colectivo.

Adicionalmente, quiere mencionar algo particular del diagnóstico de riesgo y victimización que permite entender de qué se habla: de las 8.958.570 víctimas, en Bogotá hay 354.000, sin embargo, el PC no puede olvidar la realidad de la región metropolitana, importante entonces que se llevará para la integración en el plan de emergencia y cambio climático y de este PC, la armonización con la región central, y en ese sentido la caracterización de víctimas, porque hay un umbral solo determinado por el distrito capital.

Otro elemento importante es que dentro del PC se han recogido los hechos asociados al conflicto armado documentados tanto por las organizaciones como por Fiscalía y organismos de seguridad que permiten entender la problemática de violencia con una línea de tiempo desde el año 1985 con un corte al 2010 y profundizando en los últimos 10 años, donde se tiene identificados, 9 de los 14 hechos victimizantes relacionados. Se encuentra en el PC las conductas vulneradoras de derechos, los mapas de riesgo en los cuales se presentan los hechos y delitos que impactan la población víctima residente en Bogotá, los factores de amenaza y los factores de vulnerabilidad.

Señala que es importante detenerse en que el plan a partir de leer y diagnosticar los eventos de amenazas, riesgo y conductas vulneradoras de derecho pues se produce un georreferenciación como parte de los procesos de armonización de los diferentes sistemas de información del distrito capital permite junto la Secretaría de Gobierno identificar en el mapa los factores de prevención y de protección, es decir, es un PC que no solo identifica la amenaza, sino también identifica la posibilidad de generar condiciones para enfrentarse a los riesgos, y por ello se incluye también las redes de apoyo comunitarias, las organizaciones sociales organizadas, fundaciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes en proceso de prevención de reclutamiento forzado en las localidades, los procesos organizativos en términos de madres cabezas de hogar que generan espacios de protección colectiva, entre otros, donde también están la red transgénero y de sexualidades no hegemónicas.

Explica que hay unas fases de alistamiento, donde se puede ver los responsables en la misma lógica del plan de retornos, qué le compete a la nación, qué le compete al ente territorial y adicionalmente qué le compete a las localidades, para que se pueda responder a las amenazas y a las condiciones de vulnerabilidad de la población que requiere especial protección según los mandatos de la Corte que rigen la prevención y protección de víctimas, en particular con la interpretación del distrito de lo que debe ser la prevención y protección, más que reacción a la situación de amenaza.

Por último, presenta un cronograma de actividades en el cual están como responsables a la ACDVPR y el SDARIV donde se debe trabajar de la mano con la UARIV, con unas fechas que se actualizan y apuntan a la adopción de ajustes en materia de enfoque de género y diferencial en las medidas de ayuda humanitaria inmediata para el primer semestre del 2021, la actualización de los protocolos para la atención a la población víctima del conflicto armado, una vez aprobado el plan de prevención y protección de derechos humanos, para marzo del 2021 la implementación de la estrategia de comunicación para la disminución de la estigmatización y del riesgo de los líderes y lideresas de las organizaciones de víctimas solicitada en el comité y recogidas como

elemento central porque debe haber ejercicio de confianza entre la comunidad y el estado; y una serie de talleres y de procesos participativos que van de mayo a diciembre liderados por el equipo de participación de la ACDVPR donde se aportarán herramientas para caracterizar riesgos, implementar ruta de atención, organizar la oferta institucional y armonizar la herramienta con cambio climático y plan de prevención y protección de derechos humanos de la alcaldía. Señala que básicamente ese es el resumen ejecutivo en que se apunta a las 8 medidas de asistencia, ayuda y atención humanitaria en clave de aportar a la reducción de la situación de vulnerabilidad donde hay una tensión psicológica de emergencia que es novedad en este plan, un plan de manejo de abastecimiento, temas de transporte, emergencia y alojamiento transitorio, y temas de atención médica en emergencia.

La moderadora otorga espacio para preguntas y comentarios la actualización del Plan de Contingencia para la Atención Inmediata de Emergencias Humanitarias en Bogotá. Señala que se solicita pedir la palabra y que contarán con 3 minutos para su intervención.

Interviene la Delegada Luz Marina Díaz

Asegura que en el subcomité de prevención y protección hizo algunas modificaciones y sugerencia frente al PC que se presenta y señala que ve reflejada algunas cosas en los cambios y se ven reflejadas las recomendaciones. Expresa que no es una panacea pero que es un principio del cual tienen que acceder. Ve que ya hay fechas y eso lo considera importante, señala que no todo es felicidad, pero que se debe apostar a un inicio y asegura que como delegada de la mesa de mujeres ve muchas de las recomendaciones que hicieron en el subcomité reflejadas en el Plan.

Intervienen Delegada Julissa Mosquera

Indica que como comunidad afro, se ve muchas de las apuestas plasmadas en el plan, que hay que en ciertos temas que deben tener celeridad, pues se encuentran preocupados por el tema de los centros de encuentro, pues ven que la ACDVPR está haciendo su mejor esfuerzo pero se ha visto a la UARIV muy alejada, porque la atención no es presencial ni a diario, sino por teléfono y con citas, pero la comunidad que ella representa está llegando a diario a Bogotá y es muy doloroso cuando la respuesta es que quedan en una lista de espera. Requiere más compromiso por parte de la UARIV, porque no se le puede decir a una víctima que llega que espere hasta que se le pueda atender, por lo cual considera celeridad, y que deben estar fusionadas la 2 entidades, no puede ser que el distrito este dando y la nación a veces se ve muy

alejada, sin embargo, como comunidad negra ve que las recomendaciones han estado ahí y si sienten que el plan es ambicioso y que esperan que se cristalice y se ejecute de la mejor manera por el beneficio de todas las comunidades víctimas y negras que han estado en desventaja a lo largo de la historia en este país

Interviene la Mayora Paulina Majín

Indica que quiere hacer una recomendación al Alto Consejero, porque el da la información de que solo fue un pueblo el cual fue participativo, y dice que ella representa 16 y deben estar todos los pueblos. Asegura que ella no puede decir que un solo pueblo puede estar ahí cuando deberían estar los 16 y para eso hay unas delegaciones y unas autoridades, las cuales deben ser convocadas para poder hacer ese trabajo y llegar al consejo al cual le han delegado. Sobre la UARIV, indica que por lo que ve, las falencias no son solo con los pueblos indígenas, sino con los compañeros. Expresa que cuando llaman, la respuesta es que eso le toca al distrito y pide que se armonice porque de resto no se va a poder avanzar, entonces solicita armonización ya sabiendo que le compete a cada ente, entonces pide armonizar para que llegue a las víctimas del conflicto armado, pues para eso les han delegado y ahí termina su observación.

Interviene María Fernanda Arboleda

Asegura que ve reflejada algunas solicitudes muy puntuales, pero reafirma su solicitud de que esto sea socializado con la mesa distrital.

Señala que está de acuerdo lo afirmado por la Mayora, realmente, las víctimas son responsabilidad del distrito y nación y deben ponerse de acuerdo en puntos para poder avanzar en la restitución de derechos en la ciudad de Bogotá. Reitera, que ven sus solicitudes reflejadas en el documento, y reafirma que se siga trabajando y que también las solicitudes sean explícitas que son mesas de participación y organizaciones de a pie que han solicitado participación explícita porque se ha hecho trabajo en territorio y este necesita validez y avance significativo. Reafirma que ven reflejadas sus solicitudes en el Plan.

El alto consejero recoge la recomendación de la Mayora Paulina, y le comenta hubo una socialización por delegación, conocen de una situación interna y recoge que se socialicen los 16 pueblos antes de integrar con el plan de emergencias contra el riesgo climático que se debatirá posteriormente en subcomités, pero que también las delegaciones al interior de las mesas se acuerden por mayoría y no designación como para esta discusión.

Interviene la Directora de la UARIV

Indica que responderá a Delegada Julissa, y le comenta que desde que se volvió al retorno paulatino pos-Covid, la UARIV ha realizado diferentes reuniones con la ACDVPR y su equipo para lograr concertar esas garantías de cuidado tanto para los profesionales que van a tener en los puntos, como también para la población víctima, mesas que han sido convocadas y se ha contado con la presencia de la Personería. Señala que dado a la gran cantidad de población a atender y teniendo en cuenta las restricciones en los centros locales, solamente se podría contar con 2 orientadores en los puntos, lo que limita de una u otra manera esa atención, pues, por cada orientador, se debe destinar atención a 45 personas, y con 2 orientadores solo podría atender 90 personas, a diferencia de antes cuando con 5 orientadores se podía atender a más de 200 personas, por lo tanto, esa limitación, que hoy se tiene, hoy ya se está coordinando y articulando para poder brindar esa atención personalizada y para lo cual se han llevado varias reuniones.

No obstante, señala que la UARIV, sigue garantizando la atención por todos los demás medios que se puede, en aras de poder lograr que las personas que acuden a los centros locales de atención, se ha dispuesto un listado para poder ejercer el contacto y brindarle la información a la población víctima. Reconoce que los canales están saturados, pero no es cierto que no se atiende, porque tiene estadísticas de las personas atendidas en pandemia. Asegura que hay un tema de saturación pero que se buscan todas las estrategias para poder atender a la población víctima, deja esa claridad y señala que se sigue avanzando en la articulación para garantizar tanto el cuidado de la población como el de los profesionales, servidores y operadores que acompañan la atención, y pide que no quede manto de dudas sobre que la unidad no está atendiendo a su población.

Sobre las competencias atribuidas a la entidad, asevera que bajo esas actúa la institución y si hay alguna dificultad, pide que se haga revisión porque la intención es llegar a que eso no se presente porque sí hay articulación entre distrito y nación, porque se trata de tener coordinación y comunicación fluida, pues aquí lo único importante es la atención para la población víctima que es el objeto de la UARIV.

Interviene Delegada Julissa

Dice que quisiera que se tuviera en cuenta que muchas veces desde lo alto no se puede mirar hacia abajo, y es la misma comunidad la que a veces llama y amenaza con

tomarse el sitio porque no está la presencia de la UARIV pero confía en la gestión de la Dr. María José Dangond.

La moderadora expresa que luego de agotada la discusión, es necesario definir la aprobación de la actualización del Plan de Contingencia para la Atención Inmediata de Emergencias Humanitarias en Bogotá D.C., para lo cual, y en cumplimiento del reglamento del CDJT, iniciará la votación nominal. Solicita a todos y todas las integrantes que al momento de votar contesten si aprueban o no la Actualización del Plan de Contingencia.

N°	NOMBRE	CARGO /ENTIDAD	QUÓRUM		Aprobación de la actualización del Plan de Contingencia		Abstención
			SI	No	SI	No	
1	Claudia López	Alcaldesa Mayor de Bogotá	x		x		
2	Carlos Vladimir Rodríguez	Alto Consejero	x		x		
		Alta consejería para los derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación					
3	Margarita Barraquer	Secretaria	x		x		
		Secretaría General					
4	Luis Ernesto Gómez	Secretario	x		x		
		Secretaría de Gobierno					
5	Marcela Márquez (E)	Secretaria	x		x		
		Secretaría de Planeación					
6	Alejandro Gómez	Secretario	x		x		
		Secretaría de Salud					
7	Edna Bonilla	Secretaria	x		x		
		Secretaría de Educación					

N°	NOMBRE	CARGO /ENTIDAD	QUÓRUM		Aprobación de la actualización del Plan de Contingencia		Abstención
			SI	No	SI	No	
8	Carolina Durán	Secretaria					
		Secretaría de Desarrollo Económico	x		x		
9	Xinia Navarro	Secretaria					
		Secretaría Distrital de Integración Social	x		x		
10	Nicolás Montero	Secretario					
		Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	x		x		
11	Nadya Rangel	Secretaria					
		Secretaría Distrital del Hábitat	x		x		
12	Juan Mauricio Ramírez	Secretario					
		Secretaría de Hacienda	x		x		
13	Diana Rodríguez	Secretaria					
		Secretaría Distrital de la Mujer	x		x		
14	Libardo Asprilla	Director					
		Instituto Distrital para la Economía Social - IPES	x		x		
15	Oscar Gómez	Comandante					
		Policía Metropolitana de Bogotá	x		x		
16	Oscar Rey	Comandante					
		Brigada 13 del Ejército Nacional	x		x		

N°	NOMBRE	CARGO /ENTIDAD	QUÓRUM		Aprobación de la actualización del Plan de Contingencia		Abstención
			SI	No	SI	No	
17	Diana Arboleda Ramírez	Directora					
		Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Regional Bogotá	x		x		
18	Enrique Romero Contreras	Director					
		Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA	x		x		
19	Francisco Javier Alonso	Funcionario delegado					
		Procuraduría Distrital de Bogotá	x				x
20	Arlez Mogollón	Personería Distrital					
		Personero Delegado para la Protección de Víctimas	x				x
21	Rafael Hernando Navarro	Defensoría de Pueblo					
		Defensor	x				x
22	María José Dangond	Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas					
		Directora TC	x		x		
23	Rossvan Johan Blanco Castelblanco	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas					
		Director Territorial	x		x		
24	Sandra Bonilla	Delegada					
		Mesa Distrital de Víctimas		x			
25	John Alexis Gómez	Delegado	x			x	

N°	NOMBRE	CARGO /ENTIDAD	QUÓRUM		Aprobación de la actualización del Plan de Contingencia		Abstención
			SI	No	SI	No	
		Mesa Distrital de Víctimas					
26	María Fernanda Arboleda	Delegada Mesa Distrital de Víctimas- Organizaciones de Mujeres Víctimas	x		x		
27	Julisa Mosquera	Delegada Mesa de participación de las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras	x		x		
28	Paulina Majin	Delegada Mesa de participación de los pueblos y comunidades indígenas	x		x		
29	Sandro Cristo	Comunidades Gitana o Rrom		x			

Indica la moderadora que con un quórum de 27 sobre 29 integrantes y ha sido aprobado con una votación de 23 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.

7. Cierre

El alto consejero agradece a todos y todas y celebra que Luz Marina sea la primera de muchas lideresas que participaran en el CDJT y es una deuda que esta administración cumple porque no podía pasar por alto, pues no tenía lógica ni sentido alguno la ausencia de la representación de las mujeres en el espacio.

Por último, la alcaldesa Claudia López agradece a todos y todas las participaciones en el CDJT, con el rigor con que se aborda la discusión y aprobación de diferentes planes, y conforme a las decisiones del comité del día de hoy, se solicitarán las respuestas a Ministerio de Defensa y se convocará un comité este mismo año para poder decidir sobre el concepto de seguridad. Agradece a todos.

La Moderadora indica que siendo las 9:35 pm se levanta la sesión.

ACCIONES CLAVES ACORDADAS	RESPONSABLE	FECHA
Emitir una comunicación dirigida al Ministerio de Defensa, solicitando las precisiones y aclaraciones recogidas en el punto 4 del orden del día	ACDVPR – Secretaria Técnica del CDJT	Antes del siguiente CDJT
Informar desde la UARIV cuánto dinero hay a nivel nacional y cuánto se podría disponer para el proceso de RyR en Bogotá.	Unidad para la Atención a las Víctimas	No se estableció fecha de cumplimiento
Socializar la integración del Plan de Contingencia con el Plan de Emergencias contra el Riesgo Climático con los 16 pueblos que representa la Mesa de Participación Indígena	ACDVPR – Secretaria Técnica del CDJT	Antes de la integración de los 2 planes en cuestión

7°. PLAN DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONVOCATORIA:

FIRMAS



CLAUDIA LÓPEZ
Presidenta
Alcaldesa Mayor



CARLOS VLADIMIR RODRÍGUEZ
Secretario Técnico
Alto Consejero para los Derechos de

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

Proyectó: Jorge Castillo

Revisó: Ana María Sánchez

Anexos: Presentación Concepto de Seguridad – Secretaria General

Presentación Concepto de Seguridad – Secretaria de Seguridad

Pronunciamiento de la CDBMPJT respecto de la presentación y aprobación del Concepto de Seguridad, el Plan de Retornos y Reubicaciones no Étnico y el Plan de Contingencia para la Atención Inmediata de Emergencias Humanitarias.